



# PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DE CORDOBA

ZEUS PLATAFORMA LEGISLATIVA UNIFICADA



PODER LEGISLATIVO  
PROVINCIA DE CORDOBA



Por favor, solo imprima este documento si es absolutamente necesario.

Deán Funes 94 Tel: 0351-4203400

## VERSIÓN TAQUÍGRAFICA

### 11º REUNIÓN

### 8º SESIÓN ORDINARIA

21 de marzo de 2012

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

Poder Legislativo de la Provincia Córdoba.

ZEUS PLATAFORMA  
LEGISLATIVA UNIFICADA



- Documento Oficial Provisto por el Cuerpo de Taquígrafos  
- Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.



–En la ciudad de Córdoba, a veintiún días del  
mes de marzo de 2012, siendo la hora 18 y 04:

-1-

### IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Con la presencia de 65 señores legisladores, declaro abierta la 8º sesión ordinaria del 134º período legislativo.

Invito al señor legislador Sergio Busso a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Busso procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

### VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

-3-

### ASUNTOS ENTRADOS

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.





Tiene la palabra el señor legislador Echepare.

**Sr. Echepare.-** Señora presidenta: solicito se incluya como coautor del proyecto 8760/L/12 al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador Brouwer de Koning.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Así se hará, señor legislador.

Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.

**Sra. Lizzul.-** Señora presidenta: solicito la incorporación de los legisladores Altamirano, Solusolia, Genta, Yuni y Manzanares como coautores del proyecto 8768/L/12.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Matar.

**Sra. Matar.-** Señora presidenta: solicito se incluya al legislador Carlos Gutiérrez como coautor del proyecto 8778/L/12.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Genta.

**Sra. Genta.-** Señora presidenta: solicito la incorporación como coautor del proyecto 8709/L/12 al legislador Brouwer de Koning.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Así se hará, señora legisladora.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.

Tiene la palabra el señor legislador Busso.

**Sr. Busso.-** Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 24 del Orden del Día sea girado al archivo.





**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de enviar al archivo el proyecto correspondiente al punto 24 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

**Sr. Busso.**- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 7, 8, 10 y 32 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia para la 10ª sesión ordinaria.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de otorgar preferencia para la 10ª sesión ordinaria, acordada en la Comisión de Labor Parlamentaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 7, 8, 10 y 32 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 10ª sesión ordinaria.

Tiene la palabra el señor legislador Busso.

**Sr. Busso.**- Perdón, señora presidenta, para terminar un día con muchos bloopers, es la 9ª sesión ordinaria.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se incorporan en el Orden del Día de la 9ª sesión ordinaria por acuerdo del Pleno.

Tiene la palabra el legislador Busso.

**Sr. Busso.**- Gracias.





Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 al 23 y 25 al 31 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 11º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15 al 23 y 25 al 31 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra el legislador Busso.

**Sr. Busso.**- Gracias.

Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4 y 14 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 10º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4 y 14 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 10º sesión ordinaria.





**Sra. Presidenta (Pregno).**- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

-Exptes. 8772, 8773, 8774, 8776, 8778, 8779, 8780, 8782, 8783, 8785 y 8787/L/12.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Quedan reservados en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

-Exptes. 8781 y 8788/L/12

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se giran a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

-Expte. 8786/L/12

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se gira a la Comisión de Educación y Cultura.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

-Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los Exptes. 8633/P/12 y 8716/E/12.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Quedan reservados en Secretaría.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

-Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los Exptes. 8664/P/12 y 8665/P/12, pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo.





**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 8633/P/12, despachado por la Comisión de de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 21 de marzo de 2012.

Señora Presidenta de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Alicia Pregno  
S. / D.

De mi mayor consideración:

En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del pliego 8633/P/12, solicitando la designación del Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita se preste acuerdo a dicho pliego.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

Sergio Busso

Legislador provincial

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.





**Sra. Presidenta (Pregno).**- Aprobada.

Tiene la palabra el legislador Cid.

**Sr. Cid.**- Gracias.

Señora presidenta: tenemos en tratamiento el proyecto 8633/P/12, a través del cual el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba envía un pliego solicitando la designación del Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, todo ello en cumplimiento de la Ley 9396.

Para recordar un poco, dicha ley establece que la Provincia de Córdoba adhiere a los principios y disposiciones establecidos en la Ley nacional 26.061, la cual dictamina un régimen integral de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

A su vez, en la Ley 9396 se establece la creación de la figura del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes, como así también de dos Defensores Adjuntos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los cuales tienen por objeto promover la protección y la promoción de todos los derechos consagrados en la Constitución y en la Convención del Niño y, asimismo, en las leyes nacionales y provinciales que establecen la protección de las niñas, niños y adolescentes.

En este caso, y en cumplimiento de la Ley 9396, se envió un pliego a la Legislatura con una terna, la cual está organizada por un orden de mérito establecido en virtud de los antecedentes de los postulantes. De esta forma, en primer lugar se encuentra el abogado Reynaldo Miguel Rittatore, DNI 14.703.372, quien fuera convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo a fin de realizarle una entrevista y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley. El doctor Rittatore concurrió a la citada comisión, lo cual dio lugar a que se produjera el despacho que estamos tratando. Allí verificamos el cumplimiento de los requisitos de acuerdo al artículo 6º de la Ley 9396, que establece que debe ser argentino, haber cumplido 30 años de edad –lo cual es así– y, específicamente, el inciso c) del artículo 6º, que establece que debe acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En el pliego que envía el Poder Ejecutivo se establecen los antecedentes que han sido evaluados por la Comisión para emitir despacho, en el cual consta no solamente el libre ejercicio de la profesión de abogado, sino también algunos antecedentes importantes en materia de la defensa de las niñas, niños y adolescentes, así como en la temática vinculada con los derechos de las víctimas de delitos o de violencia familiar. Asimismo, acredita el libre ejercicio de la profesión.

Siguiendo con el listado, vemos que fue integrante del equipo técnico de Asistencia a la Víctima del Delito; fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y Violencia Familiar, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Provincia de Córdoba; fue coordinador del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito de la Provincia de Córdoba; fue gerente de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría







de Justicia; fue director general de la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba; fue Subsecretario de Protección Integral del Niño y el Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba; fue director del Programa Seguimiento y Control de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y actualmente se encuentra prestando funciones como director de legales de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, ha adjuntado numerosos antecedentes como panelista y disertante, no solamente en lo que hace a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino también a las temáticas vinculadas a la violencia familiar. También se acompañan algunos antecedentes de varias intervenciones en procesos judiciales relativos a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por los antecedentes que hemos mencionado, creemos que el doctor Rittatore cumple con el requisito de idoneidad y de especialización que establece y requiere el inciso c) del artículo 6º, y habiendo tomado contacto personal con él en la Comisión de Asuntos Constitucionales, entendemos que es la persona indicada para ocupar este cargo, luego de la renuncia de la ex Defensora Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la doctora María Irene Fernández -que fue miembro de este Cuerpo en el período 2003/2007-, por motivo de su jubilación.

Entonces, como la Legislatura debe realizar la designación del Defensor Adjunto, así como la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicitamos que sea votado favorablemente el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

**Sra. Leiva.**- Gracias, señora presidenta.

Quiero manifestar, en nombre del bloque al que pertenezco, que no vamos a acompañar la designación del postulante a la Defensoría Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en virtud de varias consideraciones que voy a hacer al respecto.

En primer lugar, en junio de 2007 se sanciona la Ley 9396, por la cual se adhiere, en una polémica sesión –recuerdo-, a la Ley nacional 26.061, que eliminaba el patronato del menor; el niño dejaba de depender y de estar bajo la guarda del Estado, se lo desjudicializaba, se sacaba esa figura y pasaba a ser un sujeto de derecho.

Digo polémica y controvertida sesión porque en esa oportunidad solicitamos que no se esperara más porque debíamos tener una ley provincial adecuada a esa ley nacional, porque no bastaba una mera adhesión a la ley nacional. Pero claro, el apuro no era por adherirse a la ley nacional, el apuro era por la creación de esta Defensoría





para designar, casi simultáneamente a la sanción de esa ley, a quien hoy es Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el doctor David, a cuya designación tampoco le prestamos nuestro acuerdo, por otros hechos que seguidamente voy a manifestar.

En esa ley se creaba esta Defensoría. ¿Por qué hago mención a la rapidez? Porque tardaron cuatro años; incluso, quien vino a formar parte de la Audiencia Pública para la designación del doctor Rittatore se llenaba la boca y en reiteradas oportunidades manifestó que el niño era un sujeto de derecho con esa ley nacional, pero pareciera que en aquella época se olvidaron, y se olvidaron en reiteradas oportunidades cuando hicimos denuncias de las violaciones, abusos y maltratos en los institutos prevencionales y correccionales de la Provincia de Córdoba.

Quienes estuvieron en aquella época –la miro a la legisladora Olivero- recordarán la cantidad de hechos que fueron denunciados. Por ejemplo, el caso Caminiaga: 12 menores de entre 4 y 14 años fueron abusados y violados por quien en ese momento era chofer y, como si nada, pasó a ser director de ese instituto prevencional; también responsabilizamos al Ministerio de Justicia, que en ese momento encabezaba el doctor David, por irresponsable, por no haber tomado los recaudos necesarios, porque quien era simplemente un chofer pasó a tener la guarda y custodia de estos menores; el que cuida a los menores en los institutos prevencionales es el que los baña, los alimenta, los viste; ese, Juan Banderlan –nunca más me voy a olvidar de ese nombre- abusó y violó a esos menores de entre 4 y 14 años de edad en un instituto prevencional que debía estar bajo el control del Ministerio de Justicia, a cargo del doctor David, que después fue designado y premiado nada más y nada menos que con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se hizo un montón de denuncias: apremios ilegales, severidad agravada, abusos, maltratos físicos y muertes en institutos correccionales; Ezequiel Ustarroz, Ezequiel Rodríguez: abusos y violaciones cometidas por los guardias en institutos correccionales. Le dijimos todo esto al Ministro de Justicia: “fíjense, tengan cuidado, el Director a Cargo del Instituto Nuevo Sol, que formaba parte del Instituto Correccional Complejo Esperanza, fue cómplice en la violación de un menor de 14 años, y el doctor Néstor Correa fue imputado por encubrimiento, porque luego de revisar al menor junto con Luis Rodríguez Díaz -quien era Director del Instituto Nuevo Sol- omitieron, nada más y nada menos, que denunciarlo.

Reiteramos todos estos hechos cada sesión en el año 2007, cada miércoles presentábamos pedidos de informes, le pedía a quien en su lugar estaba presente en esa oportunidad, legislador Fortuna, que por favor -por favor le pedía- intercediera ante el Ministro de Justicia y le dijera que efectuara los controles que le competían, que tomaran cartas en el asunto. Les tenía que informar yo, porque ellos no contestaban los pedidos de informes, sobre los guardias y las autoridades de estos institutos correccionales que eran partícipes o encubrían los hechos. Le pedía que por favor los removieran del cargo, que los sacaran, y les mostraba los antecedentes de la Justicia Penal –parecía que ellos no los podían conseguir siendo ministro y secretario de Justicia, en ese momento, el doctor Pablo Reyna- que yo podía conseguir. Les mostraba y les decía: acá está, están imputados, remuévanlos, sáquenlos, dígame a su Ministro de Justicia. Pero el Ministro de Justicia de ese momento –y actualmente no he



cambiado mi apreciación y hago exclusivamente mías estas palabras- era un inútil, irresponsable y burro -porque tardó 20 años en recibirse de abogado- pero “burro” con v corta porque ni siquiera llegaba a “burro” con b larga; hablo del doctor David. A ese inútil, irresponsable y burro se lo premió con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, se lo designó a fines de 2007, inmediatamente después de sancionada esta ley, para generar ese “conchavo político”. No voy a olvidar nunca el currículum que trajeron a esta sesión. La especialización que hoy mencionaba el legislador preopinante, requisito indispensable para acceder a ese cargo, él la tenía, pero ¿sabe cómo tenía el extenso currículum? De los convenios que había firmado en su carácter de Ministro de Justicia; fue una burla.

En esa oportunidad, obviamente, no se acompañó el artículo que hacía mención a la designación. Solicitábamos que la designación se hiciera en virtud de la adhesión a esta ley nacional con la que se llenaron la boca diciendo que eliminaba el patronato y que el niño pasaba a ser considerado un sujeto de derecho; qué casualidad que lo que preveía la ley nacional fuese eliminado. La ley nacional, en la designación del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé la creación de una comisión legislativa respetando la representación parlamentaria, y quien iba a ser designado atravesaría –por medio de esa comisión- por un concurso de antecedentes y oposición. La idea era buscar al idóneo, al capaz, al más adecuado para el ejercicio de tan importante función, pero eso se eliminó, no lo quisieron tomar. Entonces, dijimos: “si no van a tomar lo de la ley nacional por lo menos permitan que aquellas organizaciones no gubernamentales que se dedicaron al tema, muchas de las cuales estuvieron junto a la doctora Marisel Cegovia y otros médicos especialistas en la temática del menor, efectúen la propuesta de quien va a ser designado Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, pero tampoco escucharon. La idea era generar este “conchavo político” para este irresponsable.

¿Por qué hago mención a esto si la idea es tratar la designación del doctor Rittatore? Porque oh! casualidad, el doctor Rittatore -mientras ejercía la función de Ministro de Justicia el doctor David- se desempeñó en el mismo período, primero como gerente de la Dirección de Asuntos Legales y después como Director General de la misma dirección.

En una oportunidad, cuando ya había terminado mi función como legisladora, lo encontré fuera de este recinto, en un lugar público, y me dijo: “recuerdo tus pedidos de informes sobre los institutos prevencionales y correccionales; nosotros, desde la Dirección de Asuntos Legales te los contestábamos”. Él tenía pleno conocimiento de lo que ocurría y de lo que denunciábamos sobre el Gabriela Mistral, el Instituto Prevencional en Caminiaga, y sobre los otros institutos prevencionales y correccionales. Y cuando la semana pasada le pregunté si recordaba los pedidos de informes que nosotros realizábamos desde la Legislatura, junto con otros compañeros, simplemente me manifestó: “yo no le contesté ningún pedido de informes”. ¡Claro! Es más fácil “lavarse las manos” y no asumir la responsabilidad que también le incumbía y le correspondía como Director de Asuntos Legales, que asesoraba al Secretario de Justicia y a su vez al Ministro de Justicia; era más fácil olvidar lo que había ocurrido en Caminiaga, en otros institutos prevencionales y en el Instituto Prevencional de esta Provincia de Córdoba.







Le pregunté al postulante de este cargo, en virtud de las funciones importantísimas que tiene –ya que él actualmente trabaja en la Defensoría porque David se llevó un grupo de gente y entre ese está Rittatore–, si había efectuado alguna intervención, alguna inspección, si había visitado alguna institución en estos cuatro años de ejercicio de la función o de funcionamiento de esta defensoría, y me manifestó que sí, que había ido al Club Juniors, que había visitado algunas escuelas públicas y privadas, que había visitado la “Ciudad de los Cuartetos”. La verdad que no sé si no vio nada Rittatore o se olvidó de contarle al Defensor de los Derechos de Niños el estado en que se encuentran las escuelas en nuestra Provincia. Creo que no vio absolutamente nada. ¿De qué le sirvió visitar las escuelas públicas o privadas de la Provincia? Probablemente se olvidó de contarle al Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, doctor David, que el Ricardo Rojas da clases en aulas–contenedor; probablemente se olvidó de contarle que el Ricardo Rojas no empezó las clases por la inexistencia de baños, con baños químicos que cuestan la pequeñísima suma de 600 pesos, y si no lo creen consulten con cualquier empresa que se dedica a ello. No tuvieron 600 pesos para que el Ricardo Rojas empezara las clases, tema que Rittatore debió haber verificado en su control y porque, además, en la Defensoría ejerce el cargo de Director de Programas de Seguimiento y Control. Entonces, ¿qué controla? No controla nada.

Uno de los requisitos que exige la Ley 9396 para la designación del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y del adjunto es la idoneidad y especialización. ¿Saben lo que es idoneidad? Es la adecuación de las condiciones personales, de las condiciones y cualidades del intelecto con el desempeño del cargo, trabajo o función a realizar. Obviamente les falta, tanto a él como al Defensor, porque no se dieron cuenta de esto, no lo denunció, no lo comentó. Pareciera que la protección del niño es en algunos aspectos.

Por otro lado, le pregunté: ¿sabe usted cuántos niños, actualmente, se encuentran institucionalizados en los institutos pevencionales?, institutos, donde –reitero– fueron violados y abusados. “No, no sé” –dijo, con mucha soltura.

El Defensor Adjunto tiene, entre sus funciones –acordado por ley–, el deber de seguimiento y control de estas instituciones públicas, con facultad de escuchar a quien efectúa un reclamo; debe velar porque se resguarden los derechos consagrados por la Constitución, por la Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y por las leyes nacionales y provinciales, e incluso verificar el incumplimiento o inobservancia de estos derechos, tiene el deber de efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Y resulta que ni siquiera sabía la cantidad de niños que se encuentran institucionalizados en esta Provincia.

Frente a esto, señora presidenta ¿usted cree que él tiene la capacidad, la idoneidad y el grado de especialización que requiere el ejercicio de tan importante función? Pero bueno, si esto no lo tiene siquiera “la cabeza”, menos aún lo va a tener el adjunto.

Entonces pensé: tal vez, por el tiempo transcurrido, perdió de la memoria los hechos que acabo de mencionar. Pero doce menores fueron abusados sexualmente, por adultos y adolescentes, en la Casa del Niño del Padre Aguilera. “¿Cuál fue la intervención de la Defensoría?” –le pregunté. “Elevamos un informe” –me respondió.



Recuerdo que en el momento en que aquí se lo designó al doctor David, el legislador Fortuna me trató de “irrespetuosa” y me dijo: “no nos falte el respeto” porque le dije que, aparte de trabajar en esta Legislatura, trabajaban en SOMISA, ya que había que tener la cara muy dura para prestar acuerdo a su designación. ¿Quiere que le diga la verdad, señora presidenta? Hoy estoy en la misma situación: el doctor David no tenía idea de lo que había ocurrido en la Casa del Niño, y este fue un hecho reciente.

Entonces, le preguntamos si sugería reformas, a lo que respondió que no. Esto confirma que las facultades del Defensor son bastante amplias y muy importantes, pero en verdad de nada sirve lo que dispone la ley y lo que se sancionó en este recinto. Porque son bastante amplias, es cierto; lástima que no las ejercen.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra el señor legislador De Loredó.

**Sr. De Loredó.**- Señora presidenta: para expresar la postura del bloque de la Unión Cívica Radical con relación al proyecto en tratamiento, debo comenzar adelantando que no vamos a acompañar la designación del doctor Reynaldo Miguel Rittatore para ocupar el cargo de Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Respecto de la competencia de la Defensoría –no queremos sobreabundar en la gran cantidad de argumentos que la legisladora Leiva esgrimió con total precisión–, interpretamos que lo que aquí cabe es tener un criterio extremadamente rígido a la hora de evaluar las idoneidades que exige la ley. Probablemente, en su planteo curricular podamos advertir que existe cierta especialización fruto de los cargos por los cuales fue transitando, pero en verdad, después de la audiencia que tuvimos con el doctor Rittatore, interpretamos que las idoneidades expresadas no fueron suficientes, fundamentalmente desde la óptica que lo analizamos. No exhibió tener un conocimiento acabado de la situación general de la Defensoría pese a ser funcionario de ella. Como bien dijo la legisladora Leiva, prácticamente no dio respuestas a ninguna de las preguntas que se le formularon, no conocía ni siquiera aproximadamente el presupuesto de la Defensoría ni la cantidad de personal de la que dispone; tampoco sugirió reformas al respecto y cuando se le preguntó si el presupuesto era suficiente contestó vagamente que probablemente haría falta más plata; no tenía conocimiento –como dijo la legisladora preopinante- de la cantidad de niños institucionalizados.

Para no redundar y siendo muy concreto, quiero decir que en el artículo 11 de la ley están expresamente establecidas las competencias del Defensor, entre ellas la de supervisar entidades públicas o privadas que se dediquen a la atención de niños albergados, ya sea en forma transitoria o permanente.

Como bien manifestó la legisladora Leiva, me parece que ni siquiera nos cabe la licencia de reconocerle a Rittatore la posibilidad de olvidar casos extremos de un tiempo atrás pero, en verdad, desconocer lo que hace poco sucedió con la Casa del







Niño del Padre Aguilera, en Unquillo, al preguntarle a Rittatore dónde estaba la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes cuando se abusaba a aquellos doce niños por parte de mayores y adolescentes nos resulta totalmente incomprensible. Me parece que todo lo demás abunda y sobra para sustentar la postura que observamos en esta audiencia, de que no están manifestadas las idoneidades requeridas. Probablemente sea un instituto sobre el que tengamos que analizar en un futuro reformas pertinentes para que haya un concurso público que acredite las idoneidades. Seguramente las audiencias que tomamos no nos proporcionan todos los elementos y herramientas que requeriríamos para analizar tremenda designación.

En conclusión, señora presidenta, está corroborado por la historia y por el presente de la Defensoría que no ha cumplido con sus responsabilidades y no estuvo a la altura de las circunstancias, motivo por el cual el bloque del radicalismo no va a acompañar la designación ni va a votar favorablemente el pliego.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señora presidenta: si bien no formo parte de las comisiones en las que se ha entrevistado al doctor Rittatore, vamos a expresar nuestro rechazo a esta propuesta por dos cuestiones fundamentales.

En primer lugar, porque justamente no acompañamos la ley en el año 2007, planteando la necesidad de tener una ley propia a nivel provincial y estando en contra de la creación de la Defensoría.

En segundo lugar, y para no explayarme, como dijo la legisladora Leiva -con quien compartimos en aquel momento el acompañamiento a todas estas organizaciones que venían a hacer estos planteos-, fuimos trabajando en el sentido de tener un paradigma completamente diferente para niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba.

Con estos breves argumentos, no vamos a acompañar, a pesar -repito- de que no formamos parte de la comisión pertinente.

Gracias, señora presidenta.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

**Sr. García Elorrio.**- Señora presidenta: confieso que esta es una de las votaciones en las que es más fácil abstenerse que votar, pero como la abstención no puede ser la forma para no abordar los temas voy a dar las razones en virtud de las cuales voy a apoyar la nominación del doctor Rittatore.





Conozco al doctor Rittatore personalmente desde hace muchísimos años, me parece que fue ayer cuando recién recibido de abogado hacía sus primeras armas en el Derecho de Familia; lo vi trabajar con entusiasmo, con dedicación y fui contraparte suyo en una serie de casos. En el Fuero de Familia somos pocos y nos conocemos casi todos, siempre encontré por parte de él comprensión y respeto a la situación humana que nos tocaba abordar y eso de alguna forma fue creando, en el espíritu de quien les habla, una cierta condicionalidad cuando vi llegar su pliego a esta Legislatura para tan importante función.

Ya aquí, lo volví a ver en la Audiencia Pública y escuché puntualmente todas las preguntas que se le hacían, que iban enderezadas a condicionamientos. Desconozco lo que pasó con la elección del doctor David y en la forma que fue elegido; acompañé a la oposición cuando sostiene que esta Defensoría de los Niños objetivamente no funciona, ya que si funcionara, distinta hubiera sido la suerte de miles de niños en esta ciudad.

Entonces, señora presidenta, me hallo entre dos fuegos: si Rittatore es David, no me da ganas de acompañarlo, pero si Rittatore es la persona que yo conocí, opto por darle el crédito porque después de todo la culpa no la tiene el chanco sino el que le da de comer. Este es un dicho que la gente de campo conoce muy bien. ¿Quién debía controlar la gestión del Defensor de los Niños? ¿A quién se le rinden los exámenes semestrales? ¿Dónde están los pedidos de destitución? Porque yo le dije: "mire, Rittatore, lo voy a apoyar pero lo voy a controlar porque es un cargo de altísima responsabilidad en la Legislatura".

No sé qué otros funcionarios pueden salir designados por esta Casa -porque son muy pocos-; David fue designado por esta Casa y debió ser controlado por esta Casa; Rittatore es designado por esta Casa y debe ser controlado por esta Casa, por eso le pedí que haga llegar a la Comisión de Asuntos Constitucionales un plan de acción para que podamos hacer la evaluación mensual de los temas, porque – disculpen lo que voy a decir- el fracaso estrepitoso de David, en buena parte, es nuestro fracaso, no de aquellos que puntualmente votaron en contra sino del Cuerpo, que lo debía controlar.

Por todo lo expresado, señora presidenta, le voy a dar un crédito al doctor Rittatore, pero no un crédito abierto. Al doctor Rittatore le exigí, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, un plan de acción para controlar puntualmente qué hace y qué no.

Cuando el desarrollo histórico de ese plan de acción nos permita ver si cumple con lo que tiene que cumplir, recién ahí estaré en igualdad de condiciones con los legisladores Leiva, De Loredo y con todos los que realmente conocen las cosas que no se hicieron bien.

Nada más, señora presidenta.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra el señor legislador Cid.





**Sr. Cid.-** Señora presidenta: simplemente quiero hacer un par de precisiones.

Creo que la legisladora Leiva -por su intermedio se lo digo- ha trabajado mucho esta materia y que es una conocedora del tema pero, primero, creo que gran parte del discurso versó sobre una discusión que ha quedado en el pasado, la designación de Héctor David, que fue una discusión que se dio en su oportunidad. Hoy estamos tratando la designación del Defensor Adjunto, no del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se podría dar un debate, dado el caso, de un pedido de informes acerca de cómo funciona el área, pero lo que estamos tratando específicamente es la designación del Defensor Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, punto sobre el cual la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió despacho.

También hay otras precisiones que sería bueno aclarar. Es cierto que la Ley 26.061 establece un procedimiento para la designación, por ejemplo, del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero también es cierto que estamos en un sistema federal y que la Constitución Nacional, en su artículo 122, establece que los gobiernos provinciales se dan sus propias instituciones locales, se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia sin intervención del Gobierno federal. Por lo tanto, la ley nacional puede marcar un rumbo, puede marcar una tendencia, pero nosotros nos damos nuestras propias instituciones porque si no, por ejemplo, tendríamos un sistema bicameral y, sin embargo, tenemos uno unicameral y esto es porque tenemos autonomía provincial. Esa misma ley establece el sistema de designación por una Comisión Bicameral, y ahí tenemos una imposibilidad de seguir el mismo sistema. Uno podría decir que ya que tenemos un sistema unicameral, que haya una comisión específica, pero estas son las normas que nosotros determinamos con nuestros criterios y se ha tratado de privilegiar esta figura porque si no, simplemente, se le prestaría un acuerdo por parte del Poder Legislativo y lo designaría el Ejecutivo. Sin embargo, lo designa el Poder Legislativo porque se ha querido privilegiar esta figura. Hay muchas otras diferencias interesantes como, por ejemplo, que la ley provincial prevé un informe semestral y la ley nacional prevé uno anual. El hecho concreto es que se trató de prestigiar esta política, se trató de seguir la política a nivel nacional con nuestras características locales. Por lo tanto, creo que denostar la regulación jurídica en un punto es algo injusto.

El doctor Rittatore asistió a la comisión, estuvo casi dos horas y, a nuestro modo de ver, evacuó inquietudes –no voy a hacer mención a quienes hablaron y no estuvieron presentes en la entrevista, sí a quienes estuvieron-, y veo que se le exige el cumplimiento de todas las funciones de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuando él es director de Asuntos Legales. Es más, en un momento, cuando se le preguntó acerca de los informes que debe presentar a esta Legislatura la Defensoría, respondió que todos los semestres contribuía con el informe que compete a su área, donde desempeña el cargo de Director de Asuntos Legales; con respecto a su área, respondió a todos los cuestionamientos de manera correcta.

Tiene los antecedentes que acreditan su idoneidad y especialidad; y creemos que sería bueno que muchos de los cuestionamientos que se realizaron ante la comisión se puedan evacuar simplemente recurriendo a los informes que debe presentar la Defensoría del Pueblo en esta Cámara y no recurriendo a un Director de



Asuntos Legales, que en su competencia funcional -en lo que a él respecta- respondió todo lo que debía.

Es por esto que esta comisión entendió que reunía la idoneidad y la especialidad para ocupar el cargo y que se había desempeñado correctamente.

Por lo expuesto, mociono que pasemos a la votación.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del Pliego 8633/P/12.

#### LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

#### RESUELVE:

Art. 1º.- Designar en los términos de los artículos 7º y 8º de la Ley 9396 al señor abogado Reynaldo Miguel Rittatore, D.N.I 14.703.372, como Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.

Art. 2º.- De forma.-

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración el pliego correspondiente al expediente 8633/P/12.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**-Aprobado.

Queda de esta manera designado el señor Reynaldo Miguel Rittatore como Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba.







Se comunicará al Poder Ejecutivo.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Por Secretaría se dará lectura a la nota que mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8716/E/12, que cuenta con despacho de comisión.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, Marzo 21 de 2012

Señora Presidenta de la  
Legislatura de la Provincia de Córdoba  
Alicia Pregno  
S / D

De mi mayor consideración:

En mi carácter de Presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 8716/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se crea el Programa Provincial Derecho Complementario por Nacimiento, con el objeto de apoyar y proteger al recién nacido y a la madre.

Contando con despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, se solicita la aprobación de dicho proyecto de ley que apunta a garantizar la igualdad desde el momento mismo en que los niños nacen.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sergio Busso  
Legislador provincial

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.







-Se vota y aprueba.

**Sra. Presidenta (Pregno).**-Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.

**Sr. Buttarelli.**- Señora presidenta, señoras y señores legisladores: voy a fundamentar el proyecto de ley 8716/E/12, que fuera enviado a esta Legislatura por el Poder Ejecutivo Provincial, y cuenta con despacho favorable de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, por el que se crea el Programa Provincial Derecho Complementario por Nacimiento, que compartiéramos hoy con el señor Ministro de Desarrollo Social, doctor Daniel Passerini.

Vale destacar que el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional le otorga a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional, y es esta convención la que proclamó y reconoció que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, estableciendo un conjunto de responsabilidades a las familias, las comunidades, las instituciones y al Estado para poner esos derechos en vigencia.

De esta manera, haciendo un poco de historia, en el año 2005 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26061 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que esta Legislatura en el año 2007 aprobó la Ley provincial 9396 de adhesión a la ley nacional antes mencionada.

Posteriormente, en mayo de 2010, nuestra Provincia, a través de la Ley 9944 de Protección Integral de la Niñez, terminó de dar forma jurídica al escenario indispensable para la definitiva puesta en vigencia del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que permita garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico provincial, nacional y en todos los tratados internacionales de los que la Nación sea parte.

La función social de la familia nos exige un abordaje directo de políticas públicas que implique un especial conocimiento y apoyo concreto de todos sus miembros.

En este contexto es innegable que el nacimiento es un acontecimiento de importancia fundamental para la vida de las personas y la unión de las familias, siendo esa misma familia la que debe ser siempre protegida por el Estado por ser base de toda la sociedad.

Es claro y manifiesto que el Gobierno de la Provincia de Córdoba viene desarrollando, mediante la ejecución de diversos programas y planes de protección de la niñez, una verdadera política de Estado. En este sentido, se debe brindar especial atención a la madre desde el comienzo del embarazo y al niño desde el momento mismo del nacimiento.





Reconocer el nacimiento significa reconocer la vida del recién nacido en el seno familiar, característica única que se da entre la madre y el hijo, lo que implica apuntalar la familia concebida como la célula básica de la sociedad.

Es necesario comprender que proteger y apoyar al recién nacido a través de su madre es fundamental en materia de política social. Estoy convencido de que la incorporación a un programa social, a través de una persona o familia en situación social vulnerable, no significa un regalo o una dádiva; se trata de una obligación del Estado para con sus ciudadanos.

Es por ello que a través del presente proyecto se pretende instituir el Programa Provincial Derecho Complementario por Nacimiento, que consiste en una prestación dineraria de pago único para apoyar a las madres de menos recursos para que puedan hacer frente de manera digna a las necesidades que se devienen en el momento mismo que los niños nacen.

Se trata, precisamente, del reconocimiento de un derecho complementario por nacimiento para cubrir una necesidad que no se encuentra prevista en los programas nacionales de Asignación Universal por Embarazo y el Plan Nacer.

En el caso de las mujeres trabajadoras registradas o que tienen un subsidio por desempleo, la ANSES paga una retribución de 600 pesos por parto. De allí surge el monto del presente derecho complementario para aquellas mujeres que no reciben dicha prestación.

El objetivo de la presente ley, según se expresa en su artículo 2º, es brindar apoyo y protección al recién nacido y a la madre parturienta, como medio de fortalecimiento del vínculo materno-filial.

Por su parte, el artículo 4º establece los requisitos a cumplir para acceder al presente programa al exigir que se trate de personas residentes en la Provincia de Córdoba, que no posean empleo formal y sin cobertura social ni servicio de medicina prepaga, debiendo realizar los controles prenatales obligatorios en el sistema público de salud.

Cumplidas estas condiciones, la madre recibirá por única vez y por cada hijo o hija que nazca con vida la suma de 600 pesos, sin perjuicio de cualquier otro beneficio que pudiera acordársele en el futuro en el ámbito nacional, provincial o municipal. Este beneficio se otorgará a las madres que den a luz a partir del día de entrada en vigencia de la ley.

Vale destacar que la propuesta del bloque de Unión por Córdoba es introducir un agregado al artículo 5º que suma al importe mencionado un ajuar compuesto por elementos de primera necesidad para el nacimiento y cuyo contenido se determinará por la vía reglamentaria.

Por último, debo decir que el artículo 10 deroga el Decreto 435 de 2011, que instituyó la ayuda para protección de la maternidad, más conocido como Cuarto Mes de Licencia por Maternidad, para las trabajadoras dependientes de la actividad privada. Se trata de un programa que no tuvo la receptabilidad social que se buscaba, a pesar de la publicidad del Gobierno provincial, a través del Ministerio



correspondiente. En el seno de la comisión, el señor ministro informó que durante los 10 meses de vigencia del referido decreto, sólo se tramitaron 810 beneficios. Además, aclaró que en este caso se trata de un beneficio no prioritario, ya que complementa un derecho adquirido, como es la licencia por maternidad de las trabajadoras registradas.

Quiero destacar que este Programa involucra un trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud de la Provincia a fin de poder contar con un registro de las mujeres que cumplen las condiciones de la presente ley y que vayan siendo detectadas en los controles prenatales, para que esta ayuda pueda llegar en el momento mismo del nacimiento.

Es nuestro deber velar por el cumplimiento de nuestros preceptos constitucionales, que establecen la obligación preventiva y subsidiaria del Estado de garantizar el crecimiento, desarrollo armónico y pleno goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Por eso, estas decisiones políticas resuelven demandas sociales que para este gobierno de Unión por Córdoba son una prioridad, ya que la justicia social es ejercer desde el Estado la razón y la equidad para que vivamos en una sociedad que fortalezca la igualdad de oportunidades.

El Estado es el que debe asegurar que se equiparen las asimetrías que son consecuencia de la vulnerabilidad social, y nosotros somos parte de este Estado que debe velar por aquellos que menos tienen, siendo esta premisa un objetivo principal de nuestro gobierno.

Por eso, la aprobación del presente proyecto de ley viene a configurar un eslabón más dentro de un conjunto de medidas y programas que el gobierno de Unión por Córdoba viene desarrollando desde hace más de doce años y que nos permite seguir cumpliendo con la obligación de restablecer los derechos que les corresponden a aquellos sectores de nuestra sociedad que menos tienen. Esta premisa marca el norte estratégico del Gobierno Provincial en la resolución de los problemas sociales que, de alguna manera, sostienen que donde hay una necesidad hay un derecho.

Señora presidenta, señoras y señores legisladores: por todos los motivos expresados, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, voy a propiciar la aprobación del presente proyecto y solicito a mis pares, por su intermedio, el acompañamiento si así lo consideran conveniente.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

**Sra. Montero.**- Señora presidenta: en nombre del bloque del Frente Cívico voy a fundamentar nuestra posición en relación al proyecto que se encuentra en tratamiento.

En primer lugar, voy a hacer una consideración que nos parece absolutamente necesaria. Nos parece una irresponsabilidad política que se pida que este proyecto, -







que, por un lado, implica la consagración de derechos a un grupo importante de ciudadanas de los sectores más vulnerables de la Provincia de Córdoba y, por otro, implica un quite de derechos a otro sector de ciudadanas de la Provincia de Córdoba-sea tratado sobre tablas. Nos parece que el Gobierno de Córdoba y el oficialismo borran con el codo lo que escriben con la mano.

Por un lado, se nos convoca al diálogo, se nos dice que vamos a ser escuchados, que se van a tener en cuenta nuestros aportes, y de pronto nos encontramos con el apuro inmediato de sancionar una norma sin siquiera haber consultado a los sectores involucrados. Nos parece inaceptable. La urgencia tiene que ver con otras cuestiones y no, como se pretende hacer saber, que nos ocupamos rápidamente de lo que no nos hemos ocupado en doce años y cien días -porque no son cien días de gobierno.

En segundo lugar, nos parece de gravedad institucional que el Gobierno de la Provincia de Córdoba -continuador del gobierno del contador Schiaretti- mande a esta Legislatura una ley que deroga un decreto; ahora pretende hacernos cómplices de la quita de derechos que fueron otorgados. No estamos de acuerdo y no lo vamos a avalar sino que vamos a ratificarlo cada vez que podamos; el Gobierno de la Provincia de Córdoba debe hacerse cargo, con el mismo instrumento público que utilizó -que es un decreto- de derogar y asumir la responsabilidad política que le compete en la quita de los derechos que hace menos de nueve meses otorgó.

Es fácil licuar, en el seno de la responsabilidad de la Legislatura, las responsabilidades políticas que le competen al Gobierno central. En este sentido, venimos a decir que apoyaremos esta nueva consagración de un beneficio de seiscientos pesos que establece el proyecto de ley, los que, obviamente, nos parece insuficientes; que, obviamente, nos parece, cuando escuché la palabra "ajuar", que no correspondía; a las mamás que no tienen ningún recurso necesitaríamos darles mucho más que un ajuar. Sin embargo, apoyaremos este beneficio en función de que nos parece central que todo aquello que esté destinado a los sectores más vulnerables cuente con nuestra aprobación.

En nombre del Frente Cívico quiero expresar que no es menor que en el artículo 11 de la ley que se nos manda a estudiar se derogue un decreto; no es menor porque se está maquillando como política de Estado que viene a abordar derechos de los sectores vulnerables; se está maquillando el problema serio de caja que tiene la Provincia de Córdoba, que tomará de los recursos que deberían ser destinados, según el Decreto 435, a dar cumplimiento al cuarto mes de licencia. No daré los números porque a posteriori lo hará el legislador Roffé; pero dejo aclarado que este proyecto nos viene a maquillar otra decisión política: dejar fuera del sistema del beneficio del cuarto mes no solamente a las empleadas del sector privado, sino también que viene a vulnerar a uno de los sectores más castigados de nuestra Provincia de Córdoba, como son las empleadas domésticas que, por el Decreto 435, tenían como único derecho gozar durante un mes de licencia.

Seguramente, me dirán que van a contar ahora con el beneficio de los seiscientos pesos. Sí, señora presidenta, van a contar con ese beneficio, pero no van a contar ni siquiera con un solo día de licencia obligatoria para permanecer junto a sus bebés. Esta mañana se lo decíamos al Ministro Passerini -que vino a intentar explicar





los beneficios de sacar este derecho-, quien alegremente nos decía que solamente habían perdido el beneficio del cuarto mes de licencia 820 mujeres de Córdoba. Y le preguntábamos si creía que las mujeres que trabajaban en la actividad privada habían desistido de pasar un mes más con sus hijos, cosa que no pudo contestar.

Hay dos derechos que deben ser reconocidos: por un lado, los seiscientos pesos, que nos parece bien; pero, por otro lado, no puede quitarse el derecho que fue adquirido, que también hace a estos derechos a los que hacía referencia el legislador preopinante.

El problema de las mamás no puede ser sólo abordado desde el punto de vista económico; el problema del desarrollo psicofísico adecuado de un niño tiene que ver también, fundamentalmente, con dos cuestiones: por un lado, la posibilidad de comer adecuadamente -si un niño no come se muere- y, por el otro, la permanencia del niño junto a su madre. Por eso, los países desarrollados las mamás tienen hasta seis meses de licencia en todas las órbitas, privadas y públicas, para que estén junto a sus niños.

Sinceramente, compartimos que tanto el Decreto 435 como el proyecto en debate implican un reconocimiento a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. En función de esto nos parece central marcar la contradicción que existe cuando tanto el citado decreto como el proyecto en tratamiento apuntan -o apuntaban porque lo van a derogar- a la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y de las mamás. Fíjense lo contradictorio, ambos utilizan el enfoque de los derechos para crear un nuevo vínculo con un sector de la ciudadanía, pero a costa de negar los derechos otorgados por dicho decreto.

El proyecto de ley define a las mujeres no como beneficiarias sino como sujetos de derecho -con lo cual estamos de acuerdo-, y hoy lo reafirmó, una y otra vez, el ministro -lo que reconoce el enfoque adoptado. Sin embargo, olvida y niega a las mujeres en el decreto que están derogando. Allí parece que las mujeres han dejado de ser sujetos de derecho.

Si bien incorporan a miles de mujeres que se encuentran en la economía informal, mediante la derogación de dicho decreto les niegan el derecho a miles de mujeres. Y digo esto -y se lo decíamos hoy al ministro-: si creyéramos -cosa que no creemos- que se deba a que las mujeres son unas "dejadas" y no piden el cuarto mes de licencia, si viéramos razón a que sólo 820 mujeres han pedido este beneficio, le decíamos hoy al ministro que eso implica un costo del cuarto mes -teniendo como un promedio 3.000 pesos mensuales- de 2.400.000 pesos para el Estado. Le decíamos ¿cuál es el sentido de sacar ese derecho si económicamente implica tan poco dinero? Entonces, hay un problema: o el dinero que implica no es tan poco y entonces reafirma que hay un problema de caja, o simplemente está mal la información que el ministro tiene y quizás el Estado -y también lo dijimos hoy- debería garantizar que todas las mujeres de la Provincia de Córdoba tengan acceso a la información que este decreto les confería como derecho.

Ambos programas se fundamentan en el trato igualitario y en la equidad de género, pero el proyecto de ley vuelve a instalar la desigualdad al dejar sin efecto el decreto. Ambos programas se autoafirman como el desarrollo y ejecución de una





verdadera política de Estado sostenida, orgánica y sistemática. Sin embargo, en menos de un año se desentiende y desmantela una política creada por el decreto en cuestión.

La pregunta es ¿de qué hablamos cuando hablamos de política de Estado? ¿Qué valoración se puede hacer de una política de Estado anunciada con bombos y platillos en plena campaña electoral? ¿Qué se puede evaluar en nueve meses? La verdad es que nos parece al menos poco serio.

El Decreto 435 incorporaba esto que tenía que ver con el reconocimiento a las empleadas del sector doméstico, y nos parecía que era importante, pero hoy quedan en una situación de verdadera vulnerabilidad.

No se trata entonces, señora presidenta, de cuestionar la generación de más derechos hacia las mujeres, sobre todo hacia aquellas que están en situación de mayor vulnerabilidad; y estamos de acuerdo con que el Gobierno debe fijar prioridades, y la verdad es que nos parece importante que ésta sea la línea de acción que se ha dicho, pero sería bueno que este Gobierno –que es continuidad del anterior– diga que las prioridades que se decidieron en el gobierno anterior no fueron las adecuadas, cuando se gastaron miles y millones de pesos y de dólares en obras fastuosas que no tenían ningún sentido.

Sería honesto que el Gobernador diga que por las prioridades que dio el otro gobierno en obras que no fueron necesarias hoy tiene que hacer ajustes de caja sobre derechos otorgados a las trabajadoras. Esto sería lo honesto, que el Gobernador de Córdoba dé la cara y que diga que se hace cargo del error que cometió su antecesor, y que no le “tire” a la Legislatura la derogación de un decreto.

Por estas razones, señora presidenta, en nombre del Bloque del Frente Cívico voy a solicitar, en primer lugar, que se excluya del despacho el artículo 11 que deroga el Decreto 435; y en segundo lugar, voy a pedir –doy por supuesto que el bloque de la mayoría lo va a rechazar– en nombre del Bloque del Frente Cívico la votación nominal del artículo al que hago referencia.

Nada más.

**Sra. Presidenta (Pregno).**– En su momento se pondrá en consideración en la votación nominal.

En realidad, es el artículo 10 el que en el despacho figura como artículo 11.

Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.

**Sra. Caffaratti.**– Señora presidenta: en primer lugar, queremos dejar sentada nuestra preocupación ya que, tal como lo manifestara la legisladora Montero, creemos que no nos corresponde como Legislatura derogar un decreto que ha sido elaborado por el Poder Ejecutivo.





En relación al proyecto en tratamiento, luego de las explicaciones del Ministro en la comisión, y en relación a esta propuesta, seguimos pensando que el proyecto es confuso y contradictorio.

Suele reconocerse al mes de marzo como el “mes de la mujer”; lo cierto es que en este mes asistimos a reflexiones y análisis del largo recorrido de las mujeres en la conquista por nuestros derechos. La equidad, la inclusión, el reconocimiento de los logros obtenidos y los desafíos que aún nos quedan por conquistar llenan los discursos, las páginas de facebook y los anuncios oficiales.

El proyecto de ley presentado por el oficialismo crea el programa provincial “Derecho Complementario por Nacimiento”, otorgando un subsidio de \$600 a madres sin cobertura social, y deroga el Decreto 435/2011 de “Ayuda para protección de la Maternidad”, en el cual se garantiza el derecho a un cuarto mes de licencia por maternidad a las mujeres trabajadoras del sector privado y a las empleadas domésticas que, como sabemos, carecen por completo de este beneficio.

Imprevistamente el Gobierno nos sorprende con una propuesta confusa en donde el derecho de unas implica la pérdida del derecho de otras.

Según el proyecto –y según lo manifestó el ministro- “se prioriza la situación de las madres parturientas dentro de las franjas más vulnerables de la sociedad, ampliando la protección a un mayor número de personas”.

A nuestro entender, señora presidenta, la derogación del Decreto 435 genera una inequidad, ya que discrimina a las mujeres trabajadoras del sector privado, en tanto que las que trabajan en el sector público seguirán gozando del derecho que se les otorgó de 6 meses de licencia pagas. En este sentido, rechazamos enfáticamente los dichos del ministro Passerini, quien hoy nos ratificó en la comisión que “el sector privado no es responsabilidad de la provincia”. Al respecto, me pregunto, les pregunto: ¿a quién sino al Estado le corresponde proteger y promover los derechos de toda la ciudadanía?; ¿al gobierno no le interesa impulsar, mantener u optimizar políticas en materia de equidad de género? ¿Qué va a pasar con las empleadas domésticas que carecen de derecho de estar con sus niños aunque más no sea un mes?

El punto central es garantizar políticas públicas estables, de manera sostenida y con acciones sistemáticas que permitan el acceso a los derechos para el conjunto de la población, independientemente del tipo de inserción laboral, en la perspectiva de avanzar efectivamente hacia políticas sociales universales.

En Latinoamérica -nombrando los países con los cuales nos gusta compararnos-, Brasil otorga 16 semanas por maternidad a las mujeres; Chile 18 semanas, Venezuela 18 semanas y Argentina 12 semanas.

Nada justifica la desacertada decisión de priorizar un derecho por encima de otro.

Córdoba se ponía a la vanguardia dentro de la Argentina, garantizando el cuarto mes -es decir, 16 semanas- de licencia a las mujeres que se desempeñan laboralmente en el sector privado.





En el mes de la mujer, debemos asistir a una lamentable decisión oficial, dando un paso atrás, que no hace más que develar el criterio asistencialista y efectista con que se están diseñando las políticas públicas, pensadas más en términos de réditos electorales y clientelares que en garantizar derechos.

Una vez más vemos la imprevisión -y cierta desvergüenza- con que se maneja la política social.

Señora presidenta: con relación a la modificación del ajuar, queremos manifestar nuestra preocupación. Creemos que las mujeres, las familias, necesitan trabajo, necesitan salario y licencia para disfrutar con sus hijos de la maternidad y poder decidir con dignidad el ajuar que quieren para ellos.

El bloque de la Unión Cívica Radical va a apoyar la propuesta del derecho complementario de nacimiento, porque lo cree un derecho para estas mujeres que hoy están excluidas de todo beneficio, y va a rechazar enfáticamente la derogación del decreto mencionado.

Gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Gracias, señora presidenta.

El 23 de febrero del año pasado, nosotros –tengo el Diario de Sesiones- discutíamos en este recinto una ley que también tuvo algunas cuestiones que fueron cuestionadas –valga la redundancia- por la falta de tiempo, porque no contaba con todo el consenso, porque -en realidad- dejaba afuera a un sector importante: el privado.

En aquel momento se planteó la importancia de incluir a los varones, porque era en atención de los hijos, no para llevar a la mujer a una prisión domiciliaria, para tratar de que Córdoba contara con una ley parecida a la de Tierra del Fuego –es el ejemplo en aquella discusión-, planteando también las nuevas parejas a partir de que se había aprobado el matrimonio igualitario.

Avanzamos, señora presidenta, en una legislación que planteaba que los tres Poderes del Estado, con una supuesta adhesión de las instituciones autárquicas, podían extender a 180 días el término de la licencia por maternidad en el caso de las mujeres, y a 8 días de licencia por nacimiento de hijo, en el caso de los varones.

Efectivamente, creemos que fue un avance con respecto al derecho de muchos trabajadores, en especial de las mujeres; sin embargo, hoy, el Ministro Passerini no nos pudo contestar si los organismos autárquicos descentralizados gozan de este beneficio.

Por otra parte, en aquel momento también pusimos en discusión la discriminación de las trabajadoras, especialmente las del sector privado, incluyendo a las empleadas del sector doméstico.







Meses más tarde se emite el Decreto 435, y en el mes de junio –acá tengo la copia- sale el reglamento del subsidio Ayuda para Protección de la Maternidad. Esto sale el 28 de junio de 2011, recordemos que estábamos en campaña electoral, incluso en el Anexo figura el lema “Córdoba con ellas” que era la gran campaña del anterior Gobernador, y que trataba de incluir a todas las mujeres, en este caso en particular, en lo que se conoce como 4º mes de licencia por maternidad -por supuesto, pagado por el Estado provincial-, invitando en el artículo 11 a adherir al proyecto a las cámaras empresarias. Lamentablemente, hoy tenemos un proyecto que anula lisa y llanamente este beneficio -diría más que beneficio este derecho- otorgado por el Decreto 435.

Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar al Ministro Passerini argumentando que no hay razones económicas. Escuchaba a la legisladora Montero preguntarse si no hay una cuestión económica en el medio. Todos sabemos que hay dificultades en la economía de la Provincia de Córdoba, por lo tanto, es necesario -de acuerdo a la lógica del Gobierno- quitar algún derecho para resolver otros problemas que tiene la Provincia.

Creemos en lo que hoy manifestó el Ministro Passerini cuando dijo que las razones son esencialmente de decisión política. Habló bastante sobre el tema de la ética planteada desde una mirada parcial, incluyendo a estas mujeres que no tienen ni obra social ni trabajo formal, por lo tanto había que buscar la forma de brindarles algún beneficio.

Creemos que es una decisión política y es completamente errada, es una decisión que echa por tierra un derecho que tenían las mujeres de los sectores más explotados de la Provincia, que tiene que ver con el sector privado, por ejemplo mujeres que trabajan en los call center, en hipermercados, en grandes superficies comerciales como farmacias, las obreras textiles, las que están ligadas a la industria metalmecánica, todas esas mujeres quedarían lisa y llanamente sin este derecho.

Para nosotros esto realmente es central, porque en realidad nos preguntamos si se gastó poca plata porque hubo 820 personas beneficiadas. ¿Por qué no seguir con este Decreto que plantea un derecho? En todo caso, el Gobierno debería hacer una campaña para llevar adelante convenios con las cámaras. Y les digo que a las cámaras empresarias esta idea no les gusta mucho, los empresarios quisieran tener una “salita” al lado de la máquina o del box –en el caso de los call center- para hacer parir a las mujeres ahí ¡¿Qué cuarto mes?; ¿qué posibilidad de estar con el niño?!

Efectivamente, es una decisión política, incluso que un Decreto sea anulado por una ley para hacerle pagar un costo político a esta Legislatura y no anularlo con otro decreto para lo cual tiene facultad el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no mantener el Decreto 435?, si a través del mismo se genera un derecho por el que miles de mujeres tienen la posibilidad -después de pelearse con la patronal, porque hay que tener ovarios, si se me permite la expresión, para decirle al patrón que la tiene prácticamente acosada porque la va a echar si falta-, de faltar porque se les enferma el niño. Si a quienes hemos trabajado en el sector público nos ha pasado, imaginemos en el sector privado qué es lo que ocurre; realmente esa empleada tiene que tener mucha capacidad para ir a pedirle a su patrón que, pagándole el Estado, pueda hacer uso del cuarto mes para poder estar de licencia con su hijo.





Sinceramente consideramos que este proyecto esconde otra cosa.

La legisladora Montero preguntaba cuál era el sentido de sacarlo. El sentido es político. Tenemos un Gobierno que hace 12 años le da todo tipo de prebendas al sector privado. Para eso sí tienen potestad la Legislatura y el Poder Ejecutivo, para otorgar eximiciones impositivas, leyes especiales, todo para el sector privado. Cuando el Estado provincial, como política pública, tiene que hacerle comprender al sector privado que una vez en la vida les tiene que proteger un derecho a las trabajadoras de su sector, quita el decreto.

Entonces, la razón es realmente preocupante. El tema de los 600 pesos a los sectores vulnerables, para nosotros es una “cortina de humo”, porque perfectamente podríamos hoy estar votando en esta Legislatura un complemento, como lo dice el título del proyecto: “Derecho Complementario por Nacimiento”, y de esa manera no tendríamos ninguna duda porque sería justo el sector de las mujeres que, efectivamente, va a tener los niños a los hospitales públicos y no tienen, absolutamente, ninguna ayuda.

Pero, ¿por qué derogar el Decreto 435? Efectivamente, porque hay una política consciente de este Gobierno de darle seguridad jurídica al sector privado, y ahora, más aun, porque el Gobernador ha anunciado la posibilidad de que diez sectores inversionistas se instalen en la Provincia de Córdoba, y este tipo de decretos son “planta capitales”.

Por eso, insistimos, es peligrosísimo quitar en el artículo 11 el decreto 435, porque va en el sentido que nosotros planteamos, no de una crisis económica-financiera; peor aún, de seguir tendiéndole la “alfombra roja” al sector privado, quitándole y liberando a este de la responsabilidad de hacer cumplir un derecho. Les permitimos a los Pagani –por dar un apellido– que hagan lo que quieran con las compañeras y mujeres obreras que trabajan en ese sector, como las de la alimentación.

Por eso no es cualquier cosa; no es secundario, y no es confuso porque sea un confundido el que elaboró este proyecto –le digo a través suyo, señora presidenta, a la legisladora Caffaratti–; es consciente esta política en Unión por Córdoba. Es por ello que en estas medidas, hay que buscar resguardar la seguridad jurídica para no “plantar” capitales. A estos derechos, efectivamente, si no los daba en una campaña Unión por Córdoba, lo íbamos a hacer nosotros, para que las mujeres que trabajan en los call center puedan usar de este derecho.

Entonces, suponemos que sin este decreto, y con las leyes especiales –a las que estamos acostumbrados ver pasar en cantidad en estos 10 años– de beneficios y prebendas al sector privado, estamos viendo ya cómo Córdoba va a tener a sus trabajadores, a través de estas inversiones, en condiciones laborales parecidas a la esclavitud.

Por eso, si bien no creemos en el argumento de la ética, esta vez sí le creemos al Ministro Passerini que aquí se trata de una decisión política, que es coherente, por supuesto, ya que defienden al sector privado, como lo han hecho toda la vida.







Estamos hablando –reitero– de las trabajadoras del sector privado, incluidas las del sector doméstico, que, como están en blanco, no van a cobrar porque efectivamente esto está destinado a los sectores que no tienen obra social, a quienes no tienen –no me gusta hablar de “ayuda”– ningún tipo de derecho. Esto no nos sorprende porque tanto el Estado nacional como el provincial siguen otorgándole todo tipo de beneficios al sector privado –empresarios, multinacionales, etcétera– mediante exenciones impositivas y subsidios y, efectivamente, veíamos interesante que, por primera vez, hubiese un decreto con un reglamento, que pueden obtenerlo en el Boletín Oficial, aunque resulta lamentable que un trabajador tenga que ir a pedirlo. Y es inconcebible que hoy, “mezcladito” con todo este debate sobre la ética, le estemos quitando un derecho a las trabajadoras del sector privado.

Después que se fue el Ministro –que nada pudo respondernos sobre si EPEC, el Banco de Córdoba, la Caja de Jubilaciones o la APROSS tenían la posibilidad de estar comprendidos en esta ley–, quedamos muy preocupados por la anulación de este decreto.

Entonces, como no compartimos la idea de cercenar derechos que un decreto, desde el año pasado, les otorga a las trabajadoras del sector privado –no tenemos nada contra los 600 pesos, que, si bien es poco, puede servir al menos para los pañales de un hijo, que cuestan 380 pesos–, le planteamos al bloque de Unión por Córdoba que retire el artículo 11, que creo que en el despacho obra con otro número. De tal modo, porque no estamos en condiciones de votar la anulación del decreto de referencia, instamos a Unión por Córdoba a que el proyecto –que establece el otorgamiento de 600 pesos– persiga efectivamente el objetivo que hoy el ministro y el miembro informante del oficialismo se encargaron de explicar, y no sea simplemente una “cortina de humo”.

Si mantener los derechos de las trabajadoras es realmente una política de Estado, les proponemos concretamente la anulación completa del artículo que plantea la derogación del Decreto 435/11.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).** - Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.

**Sr. García Elorrio.** - Señora presidenta: cuando una Provincia como Córdoba debe lo que debe y nos conducimos como azafatas en un avión en emergencia porque lo único que tenemos frente a la crisis son sonrisas, estamos condenados a navegar permanentemente en el ridículo.

Lo último que puede hacerse en una provincia que está en un estado como en el que se encuentra Córdoba, es gobernar por ocurrencias, que, si bien son buenas por un tiempo y hasta pueden servir para una elección –incluso para ganarla–, después provocan la desazón y la falta de credibilidad propias de cuando la realidad indica que hay que cambiar la ocurrencia. Lo que hay que generar cuando una provincia está como Córdoba son políticas de Estado en serio, pero bien en serio, y el





Parlamento tiene que colaborar con el Poder Ejecutivo para que se afiancen esas políticas de Estado y no se gobierne por ocurrencias.

Voy a dar un solo ejemplo respecto de la gravedad del nivel de ocurrencias que tiene esta Provincia: a fines del año pasado, estando en la Facultad de Derecho en una reunión de profesores, salimos entusiasmados a la puerta o a un ventanal para ver pasar el cuerpo exánime del Gobernador Bustos. Éramos un montón de profesores y recuerdo que me emocioné al ver a todos esos niños, esa organización, y dije: “Es el primer Gobernador constitucional que tuvo la Provincia de Córdoba, qué lindo homenaje”. Entre los presentes había un familiar de Bustos y me dijo: “Ese no es Bustos. ¿Pero cómo no es Bustos? No, no es Bustos. Pero ahí pasó la cureña, ahí lo llevaban, lo están esperando en la Catedral. No, todo esto es un escenario virtual, no es Bustos”.

Salí de ahí preocupado, porque en cierta forma había participado de la alegría, y me encontré con el cura que venía de darle el responso y me dijo: “Vengo de darle el responso a Bustos. Pero, padre, dicen que ése no era Bustos. No importa, yo se lo di al muerto, le servirá para el alma”. Cuando vi eso tomé conciencia del grado de locura que estamos viviendo en esta Provincia, grado de locura que no respeta ni a los niños que llevaron a formar en las escuelas.

En ese nivel de ocurrencias a un Gobernador de esta Provincia se le ocurrió dictar por decreto, cuando no estaba habilitado para hacerlo, una norma sumamente revolucionaria que implicaba un cambio sustancial en el reconocimiento de los derechos a las mamás de esta Provincia; era realmente impresionante: seis meses a las empleadas públicas y un mes más al sector privado. Pero, claro, era otra ocurrencia, sirvió para una elección, o no sé para qué sirvió, y hoy tenemos que derogar, o pretender que derogamos, un decreto que no le mandaron a la Legislatura –si iban a afectar recursos del Presupuesto debieron haberlo mandado-, y no sólo que no nos lo hicieron aprobar a la ida sino que hoy nos lo hacen aprobar a la vuelta.

De ocurrencia en ocurrencia, señora presidenta, no vamos a ningún lado. Esta Provincia necesita políticas de Estado en serio, es decir, qué vamos a hacer con las mamás gestantes, cómo las vamos a ayudar, un plan sostenido en el mediano y en el largo plazo.

Es muy poco serio lo que vamos a hacer hoy, ¿sabe por qué, señora presidenta?, porque a ese decreto tampoco lo desarrollaron, porque si le hubieran dado publicidad no hubieran tenido ochocientas mamás, hubieran ido creando la cultura, y es muy importante para una mamá estar un mes más con su hijo.

También pienso en aquellas mamás que decidieron la maternidad, precisamente, porque antes estaban con dudas -ya sea la mamá o el papá- con respecto a si encargaban el chico o no, y alguien dijo: “mirá ahora tenés la posibilidad de un mes más”...

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Continúe señor legislador.



**Sr. García Elorrio.-** Gracias, señora presidenta: entonces, hay ocurrencias que son faltas de respeto a la gente, es meterse con las decisiones más íntimas de la gente, porque no hay una decisión más íntima que la que toma una familia de traer una vida al mundo, y nosotros alentamos una regulación que sirve para eso y después la derogamos. Y no la deroga quien la tiene que derogar, el padre de la criatura, porque el Ejecutivo fue el de la ocurrencia así que el Ejecutivo tendría que salir de la ocurrencia.

También creo que Unión por Córdoba tiene un privilegio que el resto de los mortales no tenemos, que es leer el futuro. Deben creer en la profecía maya de que todo se acaba el 21 de diciembre porque están tomando decisiones como si después de ustedes acá no viniera nadie; están comprometiendo el Presupuesto de la Provincia de Córdoba, en forma escandalosa, en cuanto ocurrencia tienen, y va la danza de millones de un lado a otro como si acá no pasara nada.

Entonces, los invito a una sana reflexión, a que se tomen en serio la responsabilidad de conducir una Provincia que está literalmente fundida, que necesita políticas de Estado urgentes y ninguna ocurrencia electoralista más. Estoy recordando el faro y que cuando vieron que tenían faro y no tenían puerto diseñaron una terminal sumergible; siempre se las ingenian para que las ocurrencias terminen con algún tipo de resguardo.

Los invito responsablemente a que a partir de hoy se termine la improvisación permanente en la Provincia de Córdoba, porque en este barco vamos todos.

No me puedo oponer, señora presidenta -y no lo haría jamás-, a un derecho complementario, pero las mamás gestantes de la Provincia de Córdoba necesitan muchísimo más que esto, necesitan tener prioridad en los planes de viviendas del Estado; necesitan contención y apoyo durante el embarazo. Necesitan mucho más que esto y no se puede seguir charlando a la gente; no se puede decir, con ese decreto, que se avanza en un sistema y después se gira hacia otro.

En resumen, voy a votar como lo hace el Frente Cívico y como lo hacen los correligionarios radicales, en el sentido de que se mantenga este derecho complementario y, en todo caso, que se haga cargo del mismo el padre de la criatura y no le manden el obsequio a este atribulado Cuerpo, que se ha transformado en un recipiente de ocurrencias...

**Sra. Presidenta (Pregno).-** El legislador Alesandri le solicita una interrupción, ¿se la concede?

**Sr. García Elorrio.-** Sí, señora presidenta.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.





**Sr. Alesandri.-** Señora presidenta, quiero preguntarle al legislador, por su intermedio, si tiene la autorización del Frente Vecinal, su partido, para este tipo de votación.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.

**Sr. García Elorrio.-** Le voy a contestar y con mucho gusto.

Para cerrar y antes de contestarle, creo que este tema de las ocurrencias merecía por parte del oficialismo un pedido de intervención un poco más serio, no es broma las cosas que estamos hablando aquí. Pienso que no aprendió la lección el legislador Alesandri, y si los estoy llamando a que se tomen en serio la responsabilidad de gobernar una provincia a la deriva, pienso que eligió el peor de los ejemplos.

Por todo lo expresado, señora presidenta, por su intermedio le digo al Poder Ejecutivo que esto no es un cuerpo de ocurrencias, sino el Parlamento de la Provincia de Córdoba.

**Sra. Presidenta (Pregno).-** Tiene la palabra el señor legislador Cid.

**Sr. Cid.-** Señora presidenta: a lo largo de las alocuciones fui anotando algunas reflexiones. Por su intermedio, señora presidenta, le digo al legislador García Elorrio, que nos pidió reflexión, que nos pidió seriedad, un razonamiento muy simple: me resulta extraño que una pareja que está tratando de resolver formar una familia o no, tener un hijo o no, tome la decisión por la cantidad de meses de licencia que tenga la madre. Realmente, en honor a la seriedad, en honor a la reflexión que se nos pidió, creo que cuando uno va a formar una familia tiene otras cosas en cuenta.

En verdad, acá hay gente que ha trabajado mucho para tratar de sacar una familia adelante, con muchas dificultades, y en honor a esos padres y a esas madres que se han sacrificado tanto por sus hijos, me parece verdaderamente poco serio pensar que cuando una pareja decide formar una familia y tener un hijo lo haga por tener un mes más de licencia. Y si ese es el razonamiento, si tener o no un hijo por tres o cuatro meses de licencia, verdaderamente es preocupante el futuro de esa familia.

En primer lugar, ya que se habló de seriedad, quiero decir que estamos muy tranquilos y tenemos la frente bien en alto porque somos peronistas y estamos creando derechos; somos justicialistas y estamos creando derechos, no tengo ni debo sentir ninguna vergüenza en este recinto por estar tratando un proyecto de ley que crea derechos.

Como acá se ha dicho, la ley tiene varias cosas y, también como se dijo, algunas son parte de una decisión política y, agregaría que toda decisión política en el







ejercicio del gobierno tiene en cuenta criterios de oportunidad y conveniencia. Nosotros, los peronistas, hemos entendido que el criterio de oportunidad y conveniencia era tener y crear el derecho que se merecen las madres más humildes, aquellas que menos oportunidades tienen, las que más lo necesitan, las mujeres más pobres de nuestra Provincia; ese es el criterio que hemos tenido como Gobierno y como peronistas y justicialistas.

El día que otros ganen las elecciones y tengan otra idea sobre los criterios de oportunidad y conveniencia que no sean los que tiene el Justicialismo, como es beneficiar a las mujeres vulnerables, pobres, sensibles y que más lo necesitan, que lo ejecuten después de ganar las elecciones.

Este es el criterio de un Gobierno peronista: defender a los más necesitados, crear derechos. No tenemos ninguna vergüenza en crear un derecho, por el contrario, sentimos mucha alegría y orgullo por dar este debate en la sesión de hoy.

Señora presidenta, quiero hacer un razonamiento jurídico sobre la pregunta que se hizo sobre cómo la Legislatura iba a derogar un decreto. No quiero banalizar la discusión, y por eso vamos a hacer el análisis jurídico, aunque muchas veces en este Recinto se dijo que este Poder Legislativo era una escribanía de lujo que para lo único que servía era para ratificar los decretos del Poder Ejecutivo. Resulta que por la teoría de los actos propios, que a veces se sostiene en el Derecho Administrativo, deberían reconocer la existencia de esta actitud del Cuerpo de derogar por vía de una ley un decreto del Ejecutivo; esto es lo que han reclamado durante mucho tiempo.

También quiero dejar otras cosas en claro, señora presidenta: los que pasamos por una Facultad de Derecho sabemos bien que es absolutamente realizable la derogación de un decreto por vía de una Ley, porque lo primero que se estudia cuando se ingresa a la Facultad de Derecho es lo que se denomina la pirámide de Kelsen – que en realidad la hizo su alumno Merkel-, establecida en el artículo 31 de la Constitución Nacional. Esa pirámide establece la jerarquía normativa que rige en nuestro sistema de Gobierno y legalmente a nuestra Nación, modificada en el año 1994.

Por sobre todo está la Constitución nacional, y así fue que en el año 1994 se le incorporan los tratados que tienen jerarquía constitucional. Así es que por debajo de todo este andamiaje de tratados y constituciones están las leyes nacionales, a lo que le siguen los decretos.

A nivel provincial existe la misma jerarquía normativa: la Constitución provincial que hacen los convencionales constituyentes, las leyes que produce esta Legislatura y finalmente los decretos del Poder Ejecutivo. Puedo agregar que a nivel municipal pasa lo mismo: las cartas orgánicas que hacen los convencionales municipales por sobre las ordenanzas que remiten los concejales y por último los decretos.

Si un cuerpo legislativo puede crear una norma que modifique o derogue una norma anterior, como una ley, ¿cómo no va a poder realizar una ley que pueda derogar una norma de inferior jerarquía, que en este caso son los decretos? Es absolutamente realizable, nada obstaculiza a la Legislatura de Córdoba realizar una ley que derogue un decreto, ya que es de inferior jerarquía, si bien no es lo mismo al revés.



Entendiendo este acto como absolutamente legal y que estamos actuando creando derechos, ya que se crea el Derecho Complementario por Nacimiento, un derecho tanto para las mujeres como para los niños, vemos que en el artículo 104º de la Constitución provincial, cuando se habla de las atribuciones del Poder Legislativo, se nos otorga la facultad de dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivos los derechos, deberes y garantías consagradas en esta Constitución sin alterar su espíritu.

Estamos defendiendo los derechos de los más vulnerables; estamos cumpliendo con nuestras atribuciones y estamos derogando un decreto; ello es absolutamente legal y, en este caso, legítimo.

Habiendo aclarado el punto legal, señor presidente, le digo que me duele y me molesta mucho que se diga que esto es un maquillaje o que es una contradicción; que es falta de coherencia.

Debo decir que no es falta de coherencia en absoluto ni con nuestra historia ni con el contexto nacional en el que vivimos. No es falta de coherencia porque los peronistas estamos acostumbrados a crear derechos. Se habló de los derechos de las mujeres y de los derechos de las trabajadoras. Pero, ¿quién creó el constitucionalismo social en la República Argentina?; ¿quién impulsó la reforma constitucional de 1949, que daba rango constitucional a los derechos de los trabajadores?; ¿quién fue el impulsor de los derechos de la familia, de los derechos de los niños?; ¿quién fue el impulsor de que los trabajadores tengan una jornada horaria, que tengan vacaciones y un fin de semana para poder pasarlo en familia?; ¿quiénes fueron los que impulsaron la Ley de Contrato de Trabajo?

¿Acaso somos incoherentes con nuestra historia creando el derecho para las mujeres que más lo necesitan? ¡No! Siempre estuvimos a la vanguardia; como lo hizo Evita, que dio la posibilidad de que las mujeres puedan votar y que, por primera vez, haya autoridades de las Cámaras de Senadores y de Diputados que fueran mujeres. Más de medio siglo atrás.

No somos incoherentes con nuestra historia. Tampoco somos incoherentes con la política nacional y con el proyecto de gobierno. Este proyecto que crea este derecho para las mujeres que más lo necesitan es coherente con la política nacional que establece la Asignación Universal por Hijo. Estamos protegiendo el derecho de aquellas que más lo necesitan y esta política es absolutamente coherente con la política a nivel nacional. Y me animaría a decir que es absolutamente coherente con un plan de gobierno que establece no solamente este derecho para las mujeres y su protección dentro del Ministerio de Solidaridad, sino que, a través de la educación – que consideramos es el nuevo significado de la justicia social- la posibilidad de que los chicos que estudian en todos los niveles, primario, secundario, terciario y universitario, puedan viajar gratis para educarse. Ello parte de una política integral que toma al niño cuando nace y continúa a lo largo de su niñez, su adolescencia y su juventud.

Mañana se estará lanzando el Programa Primer Paso, que permite a los jóvenes tener su primer empleo, y seguramente luego se lanzará el programa para los profesionales, como los créditos y las ayudas para los mismos.





Se toma al chico cuando nace; se continúa trabajando con él en la primaria, la secundaria y la Universidad y se lo apoya aun cuando ya se ha recibido.

Eso es tener conciencia. Esto es pensar que uno toma una decisión dentro de un contexto histórico, nacional y de un programa de Gobierno provincial. No somos incoherentes; estamos creando derechos.

Es por ello que solicitamos la aprobación del proyecto de ley íntegramente porque así corresponde legalmente y porque legítimamente estamos cumpliendo con nuestra historia, con nuestro programa de Gobierno, con el contexto nacional y, si me permiten, cumpliendo una máxima del peronismo que está en las veinte verdades peronistas que dice que “los únicos privilegiados son los niños”.

Muchas gracias. (Aplausos).

-Ocupa la Presidencia el señor presidente provisorio, señor Carlos Alesandri.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Tiene la palabra el legislador Roffé.

**Sr. Roffé.**- Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra porque pensé que ya estaba agotado el tema, pero no quiero dejar pasar las expresiones que ha tenido el legislador. Creo que el hecho de levantar la voz no convence a nadie, lo que convence son los argumentos valederos y a la historia no se la puede mirar con un solo ojo.

En referencia a la coherencia, nosotros decimos que esta no es una decisión coherente del gobierno, porque se habla de crear derechos, pero no se dice que se está sacando otro.

Esta mañana, el ministro basó su alocución en cuatro pilares fundamentales. En primer lugar, dijo que el programa no tuvo adhesión. Nosotros tenemos ciertas dudas, porque no sabemos -ni lo hemos podido comprobar- si fue verdaderamente difundido, y cuando hablamos de difusión no hacemos referencia a una campaña publicitaria en los grandes medios de comunicación sino hacerla en los lugares donde se realiza la actividad privada. Quizás, el gobierno tendría que haber hecho convenios con las cámaras privadas y haber luchado por esto porque -como dijo la legisladora Olivero-, este no es un programa fácil de hacer y de llevar a la práctica en la actividad privada, ya sea comercial, industrial o de servicios.

Hablamos de falta de coherencia porque ustedes considerarán conmigo que esta no fue una decisión fácil para la sociedad cordobesa. Decirle al ciudadano común que las empleadas públicas iban a tener seis meses de licencia en vez de tres, no fue sencillo; generó discusión en la sociedad porque el ciudadano común hace los aportes para que se le paguen los otros tres meses. Se generó un debate y ni qué hablar cuando se decidió pagarles el cuarto mes a las empleadas de la actividad privada. El







ciudadano común se preguntaba si el Gobierno de la Provincia de Córdoba tenía dinero para hacer esto, pero esa discusión ya pasó.

Como sociedad asumimos esa responsabilidad, personalmente considero que ha sido un verdadero avance que la mujer pueda tener cuatro o seis meses para estar al lado de su hijo, pero hoy, como sociedad organizada –porque a esto lo decidieron el Gobierno de Córdoba y la Legislatura de Córdoba- estamos dando un paso atrás. Venimos con un argumento: el ministro dice que esto no es económico sino político, pero no sé si no lo será porque el programa de los 600 pesos sale 11.230.000 y el programa de las mujeres del cuarto mes sale 45 millones, hay más de 30 millones de pesos de diferencia.

El concepto del beneficio del cuarto mes, que según el ministro no va a perjudicar a nadie, hace que volvamos para atrás en cuestiones muy importantes. Nosotros como sociedad dijimos que estábamos de acuerdo con el cuarto mes y con los seis meses. Ahora no podemos entrar a discutir el cuarto mes.

Creo que más que gritar tenemos que pensar que como sociedad estamos dando un paso atrás porque estamos dando un beneficio que creo que es bueno, porque la mujer pobre no tiene un peso cuando sale del hospital público con su hijo a cuestras, que debería ser más, que habría que darle los pañales en vez de el ajuar; pero no importa, aunque sean 600 pesos es bueno, porque hay muchos que no los tienen. El 35 por ciento de la población de Córdoba se atiende en hospitales públicos y no tiene un peso ni para ir ni para volver. Entonces, es bueno, pero tengamos en cuenta que estamos tirando abajo un decreto que -mal hecho, bien hecho, equivocadamente hecho, porque se tendría que haber pensado mejor- establece un derecho que se está dejando de lado.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señor presidente: la verdad es que estuve escuchando atentamente al apasionado legislador Cid, que nos ha dado, realmente, una clase sobre el tema legal, que tiene que ver si “una ley puede derogar un decreto”, y le quiero decir, a través suyo, que ya lo sé Juan, es así. El problema que vos no decís –a través suyo, le digo a él...

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Señora legisladora: el legislador Cid le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

**Sra. Olivero.**- Sí, señor presidente.







**Sr. Presidente (Alesandri).**- Tiene la palabra el señor legislador Cid.

**Sr. Cid.**- Que me disculpe la legisladora Olivero, soy apasionado para todo.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- En el mes de la Mujer, el legislador Cid se definió como un apasionado.

Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señor presidente: ya que es un apasionado para todo, ojalá que sea un apasionado para escuchar, porque en realidad cuando uno plantea que se puede derogar una ley, es obvio.

El problema es el contenido del decreto que estamos discutiendo en este proyecto de ley –y no es cualquier contenido, vos Juan lo sabes bien-; estamos hablando de un contenido profundísimo que genera derechos y que hoy, con esta ley, graciosamente los quitan. Ese es el problema.

Entonces, no es un problema menor, señor presidente, el artículo 11 que anula el Decreto 435, porque había un lema: “Córdoba con Ellas”; ¿qué es ahora? ¿Córdoba con Ellas sí y Ellas no? ¿Con las del sector privado no y con las públicas sí? Pero, por favor.

Es de inclusión, entonces saquen el artículo que deroga el Decreto 435, porque no van a contar con nuestro apoyo, porque ese decreto es el que genera, por primera vez en la historia de Córdoba, la posibilidad de que las mujeres del sector privado, las obreras textiles, las trabajadoras de los comercios, las trabajadoras de casas de familia -las empleadas domésticas-, puedan tener ese derecho. Entonces, a la Justicia Social del peronismo, del Justicialismo, la empiezan a mellar con la derogación de este decreto.

Y si no, ¿cómo responden a los argumentos que están en el Diario de Sesiones del año pasado cuando el Gobernador, el 1 de febrero de 2011, el contador Schiaretti, abrió las sesiones diciendo que “iba a traerles un beneficio a las mujeres”? Me voy a permitir leer el último párrafo de lo que dijo el ex Gobernador de la Provincia de Córdoba: “En un país con pocos habitantes como la Argentina hay que darles a las madres la chance de estar más tiempo con sus hijos. De esta manera estamos contribuyendo a lograr igualdad de oportunidades y que nuestras mujeres refuercen la confianza en sí mismas”.

Esto, que no lo dije yo, lo dijo el anterior Gobernador y, en ocasión del debate, lo dijo el legislador Sella, es lo que ustedes están borrando hoy, legislador Cid. Es el foco del decreto; está en ustedes, no les quiten a las mujeres que tenían acceso a un derecho en el sector más explotado y vulnerable, aquellas que no tienen nada, la posibilidad de ejercer ese derecho.





Les pido por favor que saquen el Decreto 435 en el carácter de su derogación; manténganlo porque es una conquista que tiene la Provincia de Córdoba.

Dejemos de darle beneficios al sector público, que ya tienen demasiados; empecemos a ver qué beneficios pueden tener las trabajadoras del sector privado.

Vuelvo a hacer una apelación. Unión por Córdoba, Presidencia de esta Cámara: quiten el artículo 11, ahora número 10, del despacho de ustedes, porque desde el bloque de Frente de Izquierda no vamos a poder acompañarlos.

El Decreto 435 es central. Por eso voy a pedir que se retire pero, además, voy a pedir el voto nominal en el caso de que Unión por Córdoba no acceda a este cambio, porque de verdad están borrando con el codo lo que han escrito con la mano y, por otro lado, están impidiendo un derecho a un cúmulo de mujeres quizás tan vulnerables como las que el proyecto pretende defender.

Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Señora legisladora: en su oportunidad se pondrá en consideración la moción por usted expresada en el sentido de que se haga votación nominal.

Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.

**Sr. Brouwer de Koning.**- Gracias.

Señor presidente: es para aclarar algunas cosas y, fundamentalmente, para felicitar al bloque de Unión por Córdoba porque le debe costar mucho votar este proyecto, dado que en ningún momento ninguno de los bloques le niega que han creado un derecho. Es decir, nadie está en contra del proyecto por el que se le da esta ayuda a la gente más vulnerable, pero todos hemos objetado la quita de una conquista social.

O sea, un partido como el de ustedes, que permanentemente defiende la Justicia Social, tiene que votar ahora la derogación de un decreto, por la cual se quita una conquista social. Allí está el problema. Es decir, si no tuviera eso, todos votaríamos a favor. Eso es lo que queremos dejar claro, y que es el meollo de la cuestión quitar una conquista social que ya tenía un grupo de mujeres embarazadas.

Hoy decía el ministro que hay 58.500 nacimientos en Córdoba, de los cuales 26.000 se producen en hospitales públicos, de los cuales el 72 por ciento no tiene cobertura. Por lo cual están presuponiendo que este beneficio que están creando sería para 18.720 nuevas embarazadas y se está dejando afuera a 820 —un 0,4 por ciento.

Es decir, no entendemos la razón por la cual damos un beneficio social y quitamos otro. Allí está el meollo de la cuestión y es allí donde nosotros estamos en contra.





Por otro lado, volvemos a repetir el tema de un decreto que estamos derogando por una ley. No es que esté mal sino que decimos que estamos creando antecedentes que nos pueden perjudicar en el futuro porque va a llegar un momento en el que parecerá que a ningún decreto lo vamos a poder derogar con otro decreto, y eso también incluye a todo el interior de la Provincia, con los intendentes y los concejos deliberantes.

Entonces, les pedimos que no sigamos abusando con leyes que deroguen decretos, porque después serán ordenanzas que deroguen decretos, y así sucesivamente.

Esta es la observación que hacemos, y pedimos que en el futuro, en lo posible, los decretos se deroguen con decretos.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Tiene la palabra el legislador De Loredó.

**Sr. De Loredó.**- Gracias.

Señor presidente: “en mi fuero íntimo siento que este proyecto de ley es una de las acciones de Gobierno más importantes porque esta ley va dirigida al centro de la vida y a la esencia del ser humano; esas fueron las palabras del ex Gobernador Juan Schiaretti el día 23 de febrero del año pasado, cuando propiciaba la extensión de la licencia por maternidad.

Escuchando la sentida defensa que ha hecho el legislador Cid de la decisión que hoy se está votando, por momentos cerraba los ojos y retrotrayéndome en el tiempo, recordaba que con los mismos argumentos y con el mismo apasionamiento se defendía la decisión que hoy finalmente se borra con el codo.

Jurídicamente hablando no es verdad que siempre una ley pueda derogar un decreto; se trata del más elemental Derecho Constitucional. Al respecto, hay decretos que hacen a las facultades excluyentes de un organismo, de un funcionario o de un poder que han sido otorgadas por la Constitución. Probablemente coincidamos en que estamos ante un caso en el cual la discusión acerca de si es competente una ley para derogar este tipo de decreto tenga determinados ribetes, pero no es cierto que siempre una ley pueda derogar un decreto. Se está confundiendo todo con todo.

Desde el radicalismo festejamos la decisión del nuevo derecho que se les otorga a las mujeres vulnerables cuando van a ser madres. Lo festejamos pero no lo hacemos a cuenta porque desconocemos cuánto va a durar esto. También festejamos que este Gobierno implemente una promesa de campaña como fue el boleto educativo, pero no lo hacemos a cuenta porque no sabemos cuánto va a durar. Una buena decisión mal implementada, sin las previsiones, sin los consensos, sin la seriedad necesaria y buscando solamente una ventaja electoral hace que esa buena decisión posteriormente se vea que no es eficiente y, finalmente, quede enterrada para siempre.





Nos preocupan muchas de las cosas que acá se han dicho y, jurídicamente, me parece que se ha argumentado con mucha deficiencia. No se crean los derechos; los derechos se reconocen. De manera que nos tenemos que poner de acuerdo sobre si queremos reconocer o crear un derecho. Las madres nunca reconocieron que podrían tener derecho a un cuarto mes de licencia.

Nos damos cuenta cuando nos traen un proyecto que busca entramparnos para ver si vamos a estar de acuerdo en apoyarlo, pero a la par tienen que ver cómo van a resolver la cuestión que se está derogando. Más bien deroguen lo que se tenga que derogar y traigan los proyectos que tenemos que aprobar o no. Me parece que esto es de “corto vuelo”.

Es muy clara la postura del radicalismo y de todos los bloques de la oposición. Estamos de acuerdo con el reconocimiento de este nuevo derecho para las madres en situación de vulnerabilidad, pero rechazamos y repudiamos -porque no es prolijo ni competente- que seamos nosotros quienes tratemos la derogación de un decreto que generó expectativa.

Fueron estafados quienes los acompañaron con su voto para que ustedes estén gobernando la Provincia de Córdoba. Entre ellos seguramente había una gran cantidad de mujeres que tenían una sana expectativa sobre sus derechos.

Esta es la postura del radicalismo.

Muchas gracias. (Aplausos).

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción de voto nominal formulada por las legisladoras Olivero y Montero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Rechazada.

Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

**Sra. Montero.**- Señor presidente: quiero solicitar, en virtud del artículo 193 del Reglamento, que quede constancia en acta, cuando se produzca la votación del artículo 10, del voto negativo del bloque del Frente Cívico.

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Va a quedar constancia, señora legisladora.







Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.-** Señor presidente: veo que el “apasionado” Cid no tuvo “pasión” para convencer al bloque de la mayoría y hacer de esto un derecho para todas.

Entonces, como no van a sacar el artículo 10 –u 11 del proyecto original, vamos a mantenernos en la fundamentación que hicimos defendiendo el Decreto 435, que Unión por Córdoba va a matar dentro de un rato.

Señores legisladores de Unión por Córdoba, no los vamos a acompañar.

Gracias.

**Sr. Presidente (Alesandri).-** Gracias, señora legisladora.

Queda consignado el voto.

Debo decirle que, en verdad, usted también es apasionada y vehemente.

**Sra. Olivero.-** Así es.

**Sr. Presidente (Alesandri).-** En consideración en general el proyecto 8716/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

**Sr. Presidente (Alesandri).-** Aprobado en general.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

– Se votan y aprueban los artículos 1º a 10, inclusive.

**Sr. Presidente (Alesandri).-** El artículo 11 es de forma.

Queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.





**Sr. Presidente (Alesandri).**- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos: 8682, 8709, 8725, 8755, 8764, 8767, 8768, 8772, 8773, 8774, 8776, 8778, 8779, 8782, 8783, 8785, 8787, 8760 y 8780/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

**Sr. Presidente (Alesandri).**-Aprobados.

Tiene la palabra el señor legislador Presas.

**Sr. Presas.**- Señor presidente: después de asistir a este debate uno quiere volver a la tierra.

El día de hoy es muy importante porque se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down.

A veces, algunos no entienden mucho de qué estamos hablando. Una de cada 700 personas, en Argentina, tiene Síndrome de Down; en ese marco, tenemos que ver el contexto al que me voy a referir.

En el día de ayer, presenté un proyecto que tiene que ver con la conmemoración en el taller protegido Corazones Unidos, en la ciudad de Jesús María. La noche anterior un par de vándalos se encargó de que su depósito fuera destruido, quemaron y robaron previo al día del festejo de la conmemoración, que es hoy. Gracias a Dios los bándalos han sido aprendidos, pero quedó el sabor amargo, y lo que iba a ser una gran fiesta se transformó en una noche difícil y un día muy especial. Estuvimos allí con el ministro tratando de ayudar y apareció la solidaridad de la sociedad, y creo que en pocos días vamos a recuperar todo, producto del aporte tanto de la Provincia como de los vecinos de la ciudad.

Esta es una obra a donde asisten más de treinta chicos con este problema, donde trabajan y producen como profesionales. Hay que verlo, y para aquellos que no lo conocen, sería bueno que se acerquen a Jesús María para ver esta obra que la sostienen solamente con esfuerzo y producción propios. Robaron tabloncitos, computadoras, quemaron telares. Realmente, fue una fea situación, y más fea aún cuando sucede el día previo a la conmemoración.

Para referirme a esto quiero leer dos o tres pasajes de lo manifestado por uno de los jóvenes que habló en nombre de los 30 niños y de los padres que los acompañaban. Los niños trabajan 4 horas y los padres otras 4 para producir y





sostener dignamente el establecimiento, además, con un nivel de producción desde lo bromatológico hasta lo productivo envidiable para muchas empresas.

Dijo este joven con Síndrome de Down: "Soy una persona con Síndrome de Down y no puedo ocultarlo, pero tampoco me avergüenzo de ello, no me impide vivir mi vida, sólo quiero que me acepten tal como soy, un joven sincero, valiente, trabajador, responsable y buena persona. Tener Síndrome de Down no es una suerte pero tampoco es una desgracia. Somos distintos pero no inferiores, queremos ser nosotros mismos, ser felices, amar y ser amados, y ser útiles para nosotros y para nuestra sociedad.

Hemos comprendido que tenemos derechos y que muchos son vulnerados, hasta hace poco no lo sabíamos. No queremos ser diferentes, tenemos el derecho a hacer las mismas cosas que los demás. Queremos que se nos reconozca por nuestras capacidades y no por nuestras diferencias. A la sociedad le cuesta entender que tenemos deseos, sueños y metas como las demás personas. Cuando tengan la oportunidad de hablar alguno de ustedes con alguien como yo pregúntenle acerca de sus deseos, de sus proyectos, de sus objetivos y verán que todos compartimos los mismos sueños". Estas son las palabras de uno de esos 30 chicos que hoy nos hicieron emocionar a todos los que estábamos presentes.

Muchas gracias. (Aplausos).

**Sr. Presidente (Alesandri).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 8651/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 21 de marzo de 2012.

Sra. Presidenta de la

Legislatura de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8651/L/12, que insta al Congreso de la Nación a dar tratamiento urgente a la anulación de la Ley 26734 de 2011, denominada Ley Antiterrorista, en virtud de ser violatoria del derecho a la protesta, a peticionar a las autoridades, al derecho de huelga y a las más amplias libertades democráticas.





Se pide al Congreso nacional que también, y simultáneamente, cesen los procesos judiciales iniciados en virtud de la aplicación de esta ley, por ser nulos de nulidad absoluta.

La llamada Ley Antiterrorista 26734 incorpora al Código Penal un agravante general enunciado como artículo 41, que será aplicado cuando el delito se considere cometido con “finalidad terrorista”. La mayor consecuencia radica en que prácticamente el artículo mencionado “prohibe” y “anula” el derecho a peticionar a las autoridades.

Es inadmisibles, más aún en vísperas del 24 de marzo, que esta ley esté en vigencia en un Gobierno que se declama como defensor de los derechos humanos.

La Unicameral de Córdoba no puede ignorar, no puede tener una actitud pasiva, tiene que manifestarse explícitamente si está a favor o no de semejante ley, absolutamente anticonstitucional y vejatoria de derechos elementales.

Saludo a usted muy atentamente.

Liliana Olivero

Legisladora provincial

-Ocupa la Presidencia la señora Vicegobernadora,  
Cra. Alicia Pregno.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por la legisladora Olivero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

Tiene la palabra la legisladora Olivero.

**Sra. Olivero.**- Señora presidenta: quiero destacar que, si bien es cierto que nuestro bloque es muy pequeño, es unipersonal en esta Cámara, nos hemos visto obligados en presentar este proyecto —del cual muchos podrán decir que su temática atañe al Congreso de la Nación— justamente porque este bloque se ha hecho eco de innumerable cantidad de manifestaciones de repudio acerca de la llamada Ley Antiterrorista, 26.734, votada en diciembre, y porque creemos que es una afrenta ante cualquier principio democrático.





Córdoba tiene 18 diputados y 3 senadores que nos representan en el Congreso de la Nación, y como no han tomado carta en el asunto es que nos hemos visto obligados, desde este bloque, a insistir en la necesidad de la derogación de esta ley completamente anticonstitucional.

Nosotros creemos que la misma –esto para quienes no levantaron la mano o no aprueban esta declarativa para que el Congreso avance en la derogación de la Ley Antiterrorista– ha tenido como origen la organización de lobistas de la banca financiera, conocida en todo el mundo como GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, por lo que estaríamos ante una ley dictada propiamente por el imperialismo que tiene que ver con el remate de la soberanía política de nuestra Nación.

Esta es una ley que entendemos está destinada a perseguir, y encarcelar a quienes se oponen a los gobiernos de turno, o a algunas políticas que se llevan adelante.

Yo les voy a contar cómo debutó porque, por ahí, hay legisladores de distintos bloques que no lo conocen: esta ley debutó en Tinogasta, Belén, Chilecito y Amaicha del Valle, atacando a quienes decidieron defender su territorio para defender las riquezas nacionales y frenar una masacre ambiental. Es una ley –repito– nacida de los “pulpos financieros” que están arrasando contra todos los derechos de los pueblos de nuestro país, y que, en realidad, terminan privilegiando los negocios de los sectores pro-mineros o como Peter Moock que, como ustedes saben, son los que necesitan de este tipo de herramientas para poder acallar a los pueblos.

Esta ley les da fuerza a las patotas de policías, de funcionarios, de burócratas que, por ejemplo, llevaron adelante el asesinato de Mariano Ferreira hace un año y medio; que también llevaron adelante el asesinato de Cristian Ferreira, miembro del MOCASE en la provincia de Santiago del Estero.

Por otro lado, la Ley 26.734 alienta la represión oficial, que sólo el año pasado se cobró 11 vidas de manifestantes.

Además, esto está vinculado con el “Proyecto X”; hay muchos proyectos de espionaje, tantos que podríamos completar el abecedario; y vemos que hoy hay un gobierno que necesita de estas leyes para espiarnos e impedir que se apliquen los artículos de la Constitución relativos al derecho de peticionar a las autoridades.

Si a esta Ley Antiterrorista le sumamos el espionaje político, las declaraciones de la Presidenta contra las huelgas de los petroleros –uno de cuyos huelguistas aún está preso–, más lo que dijo Garré –que acusa de “desestabilizadores” a todos los trabajadores que reclaman–, está claro que con esta ley se busca criminalizar la protesta social, atacando de algún modo al pueblo argentino y a su derecho de protesta, cosa que nos parece propia de la dictadura y no de un régimen que se declama democrático.

A nuestro entender, esta ley sienta un estado de barbarie en nuestro país, y nuestros representantes del Congreso de la Nación deberían reaccionar; si no lo hacen, debe hacerlo esta Legislatura, avanzando en este debate.





Siento que en esta Cámara se veda esta discusión, que tiene que ver con la Ley Antiterrorista –lo digo con mucha pena–, justo en un momento muy particular porque estamos a muy pocos días del 24 de marzo, en que se piensa votar un reconocimiento –tardío, pero reconocimiento al fin– a los ex presos políticos. Y el debate que pronto nos daremos va, en realidad, a contramano de la actitud que los bloques partidarios asumen en esta Cámara frente a este proyecto, lo que me lleva a pensar que el homenaje que se piensa llevar adelante es un mero acto de hipocresía, aprobando un proyecto de ley por el que, por primera vez, se reivindica a quienes pasaron por la peor y más feroz de las dictaduras que tuvo nuestro país.

En tal sentido, pido dos cosas: primero, que el bloque de Unión por Córdoba haga una reflexión sobre este tema; segundo, que la votación de esta reconsideración se realice de manera nominal, por cada uno de los bloques que conforman este Cuerpo.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En el caso de la votación de una moción de reconsideración, señora legisladora Olivero, no está prevista la posibilidad del voto nominal.

En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora Liliana Olivero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 8757/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 19 de marzo de 2011.

Señora Presidenta de la

Legislatura de la Provincia de Córdoba





Cra. Alicia Pregno

S. / D.

Ref: Solicitud de tratamiento sobre tablas del proyecto de  
declaración 8757/L/12.

De mi mayor consideración:

En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (artículo 126), elevo la presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de declaración 8757/L/12, en la 8º sesión ordinaria (21/03/12), correspondiente al 134º período legislativo del corriente año.

Se trata del proyecto de declaración expresando beneplácito por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia en relación con la resolución del Concejo Deliberante de Río Tercero de rechazar la incorporación del concejal Juan Pablo Peirone.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Luis Brouwer de Koning

Legislador provincial

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída, formulada por el legislador Brouwer de Koning.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.

**Sr. Brouwer de Koning.**- Señora presidenta: el pedido de reconsideración de la votación del tratamiento sobre tablas es por el tema en sí. El beneplácito hacia el fallo del Tribunal Superior de Justicia en relación a la resolución del Concejo Deliberante es muy político y también atañe a los cuerpos deliberativos, por eso deseo solicitar la reconsideración y contarles en estos cinco minutos cómo sucedieron los hechos ya que muchos no se acordarán porque lleva varios años de litigio.





En el año 2007 se daban en la ciudad de Río Tercero las elecciones municipales; en ese momento, el partido creado por el senador Luis Juez ganaba posiciones y tentaba a integrantes de distintos partidos políticos a incorporarse a la agrupación que recibía el nombre de Partido Nuevo; muchos vieron esta oportunidad y abandonaron sus partidos políticos ingresando a esta nueva agrupación.

En ese contexto, se desarrolló el 15 de abril de 2007 la elección municipal donde me tocó ser candidato y triunfamos, pero el 2 de septiembre del mismo año, cinco meses después, en la contienda electoral provincial uno de los integrantes de la lista de concejales ya electos por el radicalismo aceptó la candidatura a legislador por el Frente Nuevo. Los votos obtenidos no le alcanzaron para acceder a su banca, a pesar de que iba en el número ocho y prácticamente tenía asegurada su banca, pero, ¿qué pasó?, el Partido Nuevo tenía varias sumatorias de votos e ingresaron únicamente seis con la sumatoria que él integraba, por lo tanto, no llegó a acceder a la banca en la Legislatura.

Llegó diciembre y al asumir el Concejo él se presentó como concejal; en ese momento el Concejo Deliberante le rechazó el diploma fundado en que consideraba la conducta como un acto de “transfuguismo” político y que ello se traducía en lo que se denominó “inidoneidad moral” para acceder al cargo. Consideraba a la conducta como defraudadora de la voluntad de los electores ya que había ido en una lista plural de un determinado partido político y ahora trataba de adueñarse del escaño invocando pertenecer a una agrupación política opositora.

Esta actitud no era nueva en nuestro país, se venía dando a todo nivel de gobierno ante la protesta silenciosa de los ciudadanos, cada vez más descreídos de los sistemas políticos, del valor del voto y de la seriedad de las propuestas e ideologías sostenidas por cada partido, ya que todo se podía cambiar como una vestidura según la ocasión y en beneficio exclusivo del autodenominado político.

La actitud del Concejo de Río Tercero fue una posición de valentía ante las posibles consecuencias que podría traerle aparejada esta decisión de excluirlo. Declamó el Concejo su calidad de ser la base de la democracia, como es la municipalidad, en defensa de la moral cívica, del respeto a los votantes y la no aceptación de la conducta denominada “borocotización”. Dos abogados decidieron acompañar la posición del Concejo pues entendían que el organismo había actuado conforme a sus facultades políticas y las razones de la exclusión no eran arbitrarias sino que eran incontrastables en el contexto de un sistema republicano como el que pretendíamos tener.

A partir de allí se sucedieron dos fallos en contra -primera y segunda instancia-, los cuales, básicamente, quitaban derechos que nuestro sistema constitucional otorga a los gobiernos municipales y privilegiaba el cargo electivo como un título de la persona y, por lo tanto, la decisión del cuerpo colegiado resultaba arbitraria. Al intervenir el Tribunal Superior de Justicia, por la vía extraordinaria de la casación, revocó las sentencias inferiores manifestando que su veredicto tenía carácter docente no sólo para el ámbito judicial o de la política sino para todos los ciudadanos, reconociendo la autonomía municipal y que las decisiones políticas del Concejo Deliberante no eran revisables judicialmente, en cuanto las mismas no resultaron







arbitrarias. El fallo llega en un momento de nuestra historia en el que nos cuesta, como sociedad, asumir los conceptos cívicos de república, democracia y federalismo.

Este dictamen se hace presente para hacer docencia y echar luz y verdad sobre un vicio político que debía terminar. Esto también incumbe a cualquier futura decisión en un cuerpo colegiado.

Muchas gracias.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Brouwer de Koning.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 8762/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.

**Sr. Secretario (Arias).**- (Leyendo):

Córdoba, 20 de marzo de 2012.

Sra. Vicegobernadora  
de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 8762/L/12, iniciado por el legislador Roffé, solicitando al Poder Ejecutivo interrumpa la publicidad oficial en los medios nacionales que hacen referencia al Boleto Educativo.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Oscar Roffé

Legislador provincial



**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Roffé.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

Tiene la palabra el señor legislador Roffé.

**Sr. Roffé.**- Señora presidenta: insistimos en el tratamiento de este proyecto porque creemos que se están perjudicando los intereses de los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, de los contribuyentes particularmente.

Creo que el último año de gobierno del contador Schiaretti tuvo una particularidad que fue la de llevar a la práctica una campaña publicitaria sumamente costosa para el Estado cordobés, que sin duda ha influenciado en la situación crítica que tiene la Provincia.

Cuando asume el Gobernador De la Sota, algunos ingenuos pensábamos que iba a suspender la publicidad por varias razones, no sólo por la situación económica de la Provincia sino también porque hacía muy poco que asumía el Gobierno, había pasado una elección, había sido elegido por tercera vez gobernador, no necesitaba hacerse conocer, no necesitaba la aprobación de la ciudadanía porque acababa de ganar una elección, pero esto no ocurrió. A las 12 horas de asumir el Gobernador, en Río Cuarto empezaron a aparecer los carteles de propaganda en los distintos medios.

Esto se ha venido incrementando fuertemente, a tal punto que ya no son avisos publicitarios sino que son cortos publicitarios; algunos –diría yo- son “cortometrajes” concienzudamente pensados y creados que, sin ninguna duda, tienen un elevadísimo costo. Pero a esta situación se agregó otra que nosotros, desde esta banca, ya habíamos denunciado: la vez pasada había contratado el Canal Crónica y ahora empezó con difusión a nivel nacional del Boleto Educativo.

Particularmente creo que a ningún habitante fuera de la Provincia de Córdoba le interesa esa propaganda, salvo que se busque, con esa propaganda, difundir la persona del Gobernador. Es decir, no hay ninguna duda de que los publicistas del Gobernador lo han convencido para que empiece una gran campaña a nivel nacional, seguramente con la intención de una futura candidatura en ese nivel.

Consideramos que la situación de la Provincia de Córdoba –no sólo nosotros sino que también lo repite el Gobernador y las cuentas están muy ajustadas, y es un exceso hacer propaganda fuera del ámbito provincial. Son muchas las cuestiones y los requerimientos que tiene el Gobierno.

Para terminar voy a contar el caso particular de San Francisco, en donde vivo. El año pasado, una joven de un colegio secundario, estando en el recreo, recibió un golpe en la cabeza con un hierro que tiró un compañero. Esto le provocó un traumatismo de cráneo que puso en serio peligro su vida, fue internada en la ciudad de





Santa Fe, estuvo muy grave, lograron recuperarla pero quedó con un déficit neurológico muy importante. El médico le indicó un tratamiento de rehabilitación en un centro de tercer nivel. Se trata de gente de escasos recursos y la Provincia no se hizo cargo, por lo que tuvieron que recurrir a la vía judicial con una medida cautelar que obligó a la Provincia a afrontar el tratamiento, el cual se lo aplicaron unos meses.

En diciembre, luego de unos días de vacaciones, cuando quiso volver, le dijeron que la Provincia no había pagado. Así que ahora, los abogados están detrás del juez para que declare el embargo de las cuentas provinciales para pagar este tratamiento.

¿Cuántos casos similares a este habrá en el ámbito de la Provincia de Córdoba? Por lo que creo que el Gobernador y sus publicistas deberían pensar que es un acto de irresponsabilidad gastar este dinero en este momento en que la Provincia está en serias dificultades.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- En consideración la moción de reconsideración del legislador Roffé.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Rechazada.

Les recuerdo a las legisladoras y legisladores que he firmado el decreto de convocatoria a sesión especial con motivo de conmemorarse el 24 de marzo el 36 aniversario del golpe de Estado.

Quedan todos ustedes debidamente notificados para este sábado 24 de marzo a las 10 horas.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Sergio Busso a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.

-Así se hace.

**Sra. Presidenta (Pregno).**- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 20 y 53.

**Silvana Sabatini**

**Directora del Cuerpo de Taquígrafos**

